



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Ciencias Sociales

Unidad de Posgrado

**La violencia electoral local: propuesta de un modelo
interpretativo y preventivo a partir de estudios de
casos**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Sociología con
mención en Sociología Política

AUTOR

Carlos Enrique REYNA IZAGUIRRE

ASESOR

Dr. Julio Víctor MEJÍA NAVARRETE

Lima, Perú

2017



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Reyna, C. (2017). *La violencia electoral local: propuesta de un modelo interpretativo y preventivo a partir de estudios de casos*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.

Metadatos complementarios

Datos de autor	
Nombres y apellidos	Carlos Enrique Reyna Izaguirre
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	09296433
URL de ORCID	-
Datos de asesor	
Nombres y apellidos	Julio Víctor Mejía Navarrete.
Tipo de documento de identidad	DNI
Número de documento de identidad	08425674
URL de ORCID	0000 - 0002- 4170 - 5643
Datos del jurado	
Presidente del jurado	
Nombres y apellidos	Nicolás Javier Lynch Gamero
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	10270250
Miembro del jurado 1	
Nombres y apellidos	Carlota Alicia Casalino Sen.
Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	10218140
Miembro del jurado 2	
Nombres y apellidos	César Armando Germaná Caveró.
Tipo de documento	DNI.
Número de documento de identidad	09161970
Miembro del jurado 3	
Nombres y apellidos	Tirso Aníbal Molinari Morales.

Tipo de documento	DNI
Número de documento de identidad	08233588
Datos de investigación	
Línea de investigación	No aplica.
Grupo de investigación	No Aplica
Agencia de financiamiento	No aplica.
Ubicación geográfica de la investigación	País: Perú Departamento: Ancash Provincia: Santa Distrito: Samanco Latitud: 9° 15' 43" Sur Longitud: 78° 29' 46" Oeste
Año o rango de años en que se realizó la investigación	2005 - 2015
URL de disciplinas OCDE	Sociología https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANATO DE AMÉRICA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD DE POSGRADO

ACTA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN SOCIOLOGÍA, MENCIÓN EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA

En Lima, a los once días del mes de julio del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Grados de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a horas 4:00 p.m., bajo la Presidencia del Dr. NICOLÁS JAVIER LYNCH GAMERO y con la concurrencia de los demás Miembros del Jurado Examinador, se inició el acto académico invitando al graduando **CARLOS ENRIQUE REYNA IZAGUIRRE**, para que realice la sustentación de su Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Sociología, mención en Sociología Política, titulada:

“LA VIOLENCIA ELECTORAL LOCAL: PROPUESTA DE UN MODELO INTERPRETATIVO Y PREVENTIVO A PARTIR DE ESTUDIOS DE CASOS”

A continuación fue sometido a las objeciones por parte del Jurado. Terminada esta prueba y verificada la votación; se consignó la calificación correspondiente a:

B MUY BUENO 17

Por cuanto, el Jurado, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, acordó recomendar a la Facultad de Ciencias Sociales para que proponga que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgue el Grado Académico de Magíster en Sociología, mención en Sociología Política, al Bachiller **CARLOS ENRIQUE REYNA IZAGUIRRE**. Siendo las 5:00 p.m. y para constancia dispuso se extendiera la presente Acta y firmaron:

Dr. Nicolás Javier Lynch Gamero.
PRESIDENTE

Dra. Carlota Alicia Casalino Sen.
MIEMBRO

Dr. Tirso Aníbal Molinari Morales.
MIEMBRO

Dr. César Armando Germana Caverro.
MIEMBRO

Dr. Julio Víctor Mejía Navarrete.
ASESOR



**Dr. NICOLÁS JAVIER LYNCH GAMERO
DIRECTOR**

PABELLÓN JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI – CIUDAD UNIVERSITARIA

Teléfono: 6197000 Anexo 4003, 4004. Lima – Perú.

Correo: upgccss@unmsm.edu.pe, upgccss@yahoo.es, upgccss@hotmail.com

Web: <http://sociales.unmsm.edu.pe/>

A Lidia Oie Jiques y Eduardo Reyna Oie, mi hijo querido y su mamá, con los que tengo una deuda infinita.

Tabla de contenido

Resumen.....	4
Introducción: Planteamiento De La Investigación Y La Situación Problemática	8
Formulación Del Problema: La Pregunta	9
Justificación Teórica Y Práctica De La Investigación	9
Objetivos De La Investigación.....	13
Marco Teórico	13
El Concepto De Violencia.....	13
Factores asociados a la violencia en procesos políticos según Samuel Huntington y Giovanni Sartori.....	15
Hipótesis	16
Hipótesis General.....	16
Hipótesis Específicas	16
Metodología.....	17
Primera Parte: Informe General De La Investigación.....	19
Capítulo I: Una propuesta de formulación teórica sobre la violencia electoral local y sus causas	19
La Discusión Precedente De La Violencia Electoral Como Concepto.....	19
Una Propuesta Sobre El Concepto De Violencia Electoral	23
Tipos De Violencia Electoral	24
La Indagación Sobre Las Causas De La Violencia Electoral En Estudios Precedentes A Esta Tesis.....	26
Capítulo II: Revisitando Un Estudio Monográfico Sobre Los Casos De Santa Cruz, Los Baños Del Inca Y Samanco En 2002	31
Capítulo III: Samanco 2003 - 2014: Polarización Irresuelta Y Desborde De La Violencia	50
Casana Logra Su Cuarta Reección	50
Las Tres Derrotas De Casana.....	51
Tras Once Años, Casana Vuelve A La Alcaldía	55
Inhabilitación Temporal A Casana.....	56
Corte Suprema Y JNE, Inhabilitación Definitiva.....	59
Asesinato En La Ruta.....	60
El Requerimiento Acusatorio Del Fiscal.....	60
Los Imputados Y Las Penas Pedidas	65
Conclusión De Doce Años De Polarización	66
Segunda Parte: Conclusiones Generales	68
Tres Casos De Violencia Electoral Reactiva	68
¿Qué Hacer Para Prevenir La Violencia Electoral?	71
Acciones De Corto Plazo Y Modificaciones Legales.....	71
Sobre El Marco Social E Institucional	75
Un Caso De Violencia Extrema.....	78
Referencias	80
Tablas	85

Resumen

La presente tesis pretende responder por qué un proceso electoral local degenera en un conflicto violento. Su hipótesis es que, además de factores puramente electorales y de corto plazo, hay también factores sociales e institucionales que vienen de antes, enmarcan a los procesos electorales, y ayudan a explicar la degeneración de una competencia electoral en violencia.

El autor pretende aportar una perspectiva teórica analizando críticamente las investigaciones previas sobre la materia en el Perú. En el primer capítulo revisa los conceptos que ellas han manejado sobre conflicto y violencia electoral. Igualmente, sus hallazgos respecto a las causas de esas situaciones. Como resultado, propone un concepto alternativo de violencia electoral, el mismo que se inspira en las reflexiones de Hannah Arendt sobre la violencia. Igualmente, en la búsqueda de explicaciones, se apoya, por una parte, en las ideas de Giovanni Sartori sobre las consecuencias del escaso desarrollo de los partidos políticos y en las de Samuel Huntington respecto a las consecuencias que traen las situaciones de cambio social y diferenciaciones de intereses en el marco de instituciones políticas precarias.

Con esas perspectivas de análisis, en el Capítulo II se vuelven a analizar los hallazgos sobre tres procesos electorales afectados por la violencia electoral en el año 2002 y que el autor había trabajado en una investigación monográfica en 2003. Esta vez lo hace con la perspectiva teórica desarrollada en el Capítulo I.

En el Capítulo III el análisis se focaliza en lo sucedido entre 2003 y 2014 en uno de esos tres distritos, en donde la violencia llegó a los niveles más extremos y por lo tanto se puede apreciar hasta donde se puede llegar si, además de actuar sobre los factores puramente electorales y de corto plazo, no se actúa sobre los factores más estructurales y de más largo plazo.

En las conclusiones se resume la ruta que va desde las características sociales e institucionales de una circunscripción local hasta el desencadenamiento de violencia en un proceso electoral. La probabilidad de que un proceso electoral local degenere en hechos de violencia estaría determinada por la coincidencia de los factores siguientes: una significativa proporción de la población en condiciones de pobreza o desempleo, un proceso de diferenciación social al interior de la localidad, escaso o nulo desarrollo de instituciones políticas locales, existencia de liderazgos personales que privilegian una relación clientelista con una parte de la población, en particular con la parte pobre, polarización social y política de la competencia electoral entre dichos liderazgos y sus opositores, y un marco legal electoral que coadyuva a la polarización al no proveer garantías para una competencia limpia y da lugar a un clima de desconfianza.

Si coinciden esos factores, la probabilidad de violencia es alta. Esta se desencadena si la gestión del proceso por las autoridades electorales no logra revertir la desconfianza sino por el contrario potencia el descontento y, por otro lado, se carece de la fuerza de seguridad pública en un nivel que pueda disuadir pacíficamente a los actores de la violencia.

Finalmente, la combinación de una buena gestión del proceso electoral por parte de los organismos públicos electorales y de una buena protección por parte de las fuerzas de seguridad, puede salvar un proceso electoral específico, pero, si no se actúa sobre los factores sociales o institucionales más de fondo, el factor más determinante de la violencia electoral, la polarización política, puede volver a manifestarse y rebrotar la violencia hasta niveles extremos.

Palabras claves: Elecciones / Violencia / Elecciones Locales/ Polarización/ Partidos Político/ Violencia Electoral / Elecciones Municipales

Abstract

This thesis looks to answer why a local electoral process degenerates into a violent conflict. The hypothesis is that, in addition to purely electoral and short-term factors, there are also social and institutional factors that come from before, frame electoral processes, and help to explain the degeneration of electoral competition into violence.

The author intends to provide a theoretical perspective by analyzing the previous studies on the subject in Peru. For that, In the first chapter, he reviews the concepts that those studies have done about electoral conflict and violence. Likewise, the research findings regarding the causes of these situations. As a result, he proposes an alternative concept of electoral violence, the same one that is inspired by Hannah Arendt's studies about violence. Likewise, in the search for explanations, he relies the research, on some of the ideas of Giovanni Sartori about the consequences of the poor development of political parties and on those of Samuel Huntington regarding the consequences of the social change and differentiations of. interests within the framework of precarious political institutions.

With these analytical perspectives, in chapter II it is analyzed the findings on three electoral processes affected by electoral violence in 2002, processes that had been worked before by the author on a monographic investigation in 2003. For this thesis, he does so with the theoretical perspective developed in Chapter I.

In Chapter III the analysis focuses on what happened between 2003 and 2014 in one of these three districts, where violence reached the most extreme level, for that it is possible to recognize how deep it could be if is not taken into consideration the more structural and longer-term factors in addition of the electoral and short-term factors.

The conclusions summarize the route that goes from the social and institutional characteristics of a local constituency to the unleashing of violence in an electoral process. The probability that a local electoral process degenerates into acts of violence would be determined by the coincidence of the following factors: a significant proportion of the population living in poverty or unemployment, a process of social differentiation within the locality, little or no development of local political institutions, existence of personal leaderships that privilege a clientelist relationship with a part of the population, particularly with the poor population, social and political polarization of electoral competition between those leaderships and their opponents, and an electoral legal framework that contributes to the polarization by not providing guarantees for fair competition and creates a climate of mistrust.

If these factors coincide, the probability of violence is high. This is triggered if the management of the process by the electoral authorities does not manage to reverse mistrust but on the contrary increases discontent and, on the other hand, if the public security force is lacking at a level that can peacefully dissuade the actors of the violence.

Finally, the combination of proper management of the electoral process by public electoral bodies and the proper protection by the security forces could save a specific electoral process, but if social or institutional factors are not taken into consideration more deeply, the most determining factor in electoral violence, political polarization, can re-manifest itself and violence could reappear to extreme levels.

Keywords: Elections / Violence / Local Elections / Polarization / Political Parties / Electoral Violence / Municipal Elections

Introducción: Planteamiento De La Investigación y la Situación Problemática

En 2001, después de varias elecciones generales muy controvertidas respecto a si fueron libres, justas y limpias, el Perú volvió a tener procesos electorales con un funcionamiento acorde a los estándares de la democracia representativa (Goodwin–Gill, 1994). Desde allí, dichos procesos se han desarrollado con cierta normalidad.

Dicha normalidad ha sido más clara para el caso de las elecciones presidenciales y congresales. Ninguna de esas elecciones, desde el 2001 hasta el 2016, ha sido afectada por grandes o graves sucesos de violencia, ni sus resultados han sido materia de impugnaciones de fondo por alguno de los partidos competidores. Menos aún han sido frustradas, y por tanto los organismos electorales no han tenido que volver a convocar a ninguno de los procesos de esas elecciones.

La situación no ha sido la misma para el caso de las elecciones municipales. Cada una de las elecciones municipales desarrolladas desde el 2002 hasta el 2014 han tenido, por lo menos, un cierto número de casos en el que el proceso electoral terminó degenerando en episodios de violencia. Estos han sido reportados y analizados en cuatro sucesivos estudios y publicaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre 2003 y 2016.

Estos episodios de violencia, implican que, por lo menos allí donde ocurrieron, hubo daños a personas, propiedades, a los procesos electorales mismos y a las entidades encargadas de desarrollarlas. De hecho, estos organismos se vieron obligados a convocar a nuevos procesos electorales donde estos se frustraron por la violencia que se desencadenó.

Lo que esto indica es que, por lo menos, en una parte de las circunscripciones electorales no se cumplieron algunas de las condiciones fundamentales para desarrollar un proceso electoral legítimo, es decir aceptado por todos los competidores electorales. Y por eso, al menos uno de esos competidores desató acciones de violencia para frustrarlo.

Dada la recurrencia de este tipo de situaciones de violencia en el marco de procesos electorales locales, resulta pertinente, conforme lo hicieron los estudios ya mencionados, seguir indagando en las razones y procesos que provocan esa violencia.

Formulación Del Problema: La Pregunta

La pregunta central de esta tesis es la siguiente: ¿Por qué un proceso electoral local degenera en un conflicto violento?

Nos limitamos a los procesos electorales locales, pues con frecuencia son elecciones de este nivel en los que han ocurrido situaciones de violencia que han derivado en el fracaso del proceso y en la necesidad de llevar a cabo elecciones complementarias posteriores.

Justificación Teórica Y Práctica De La Investigación

Como ya se ha referido, hay estudios y publicaciones sobre violencia y elecciones locales en el Perú que se han realizado y publicado por la ONPE desde el 2003 hasta el 2016, dentro de su serie Documentos de Trabajo. Sin embargo, sus conclusiones respecto a por qué se desencadenan los episodios de violencia electoral difieren de un estudio a otro, y podrían no responder cabalmente a la pregunta.

Como veremos en detalle más adelante, el primero de estos estudios (Reyna, 2003) postuló una explicación que encontró factores sociales, políticos no electorales, y políticos electorales, tanto de mediano plazo como de corto plazo; pero careció de una armazón conceptual que le diera consistencia teórica. En particular, no incluyó una propuesta o una discusión sobre el concepto de violencia electoral.

Los siguientes estudios de la ONPE, de los años 2010, 2013 y 2016, sí incluyeron, cada cual, sus referentes teóricos pero sus conclusiones encontraron explicaciones restringidas al plano directamente electoral y al corto plazo.

En relación a estos antecedentes, esta tesis propone, en el primero de sus capítulos, un marco conceptual más exhaustivo sobre la violencia electoral y, a la vez, una respuesta más amplia respecto a las razones de aquella violencia, al explorar factores adicionales a los puramente electorales y de corto plazo.

Además de aportar a la discusión teórica sobre la violencia electoral, este estudio busca aportar un marco de interpretación sobre la violencia electoral que será útil para el diseño de políticas de prevención. De hecho, las leyes, reglamentos y procedimientos electorales se diseñan precisamente para lograr elecciones pacíficas, con reglas claras y consensuadas, y con resultados legítimos y ampliamente aceptados por los contendores y los ciudadanos. Buena parte de esta normativa ha sido pensada para prevenir un contexto de violencia así como el eventual rechazo a los resultados de una elección.

Esta normativa se ha ido estableciendo en nuestro país a lo largo del tiempo. Recién hacia 1963 pudo haber en el Perú un marco legal idóneo para tal fin (Paniagua, 2003, pp.61 -89).

En casi todo el siglo XIX, los días mismos de las elecciones eran una jornada de peleas callejeras por el control de las mesas de sufragio:

Un grupo político frecuentemente expulsaba a sus opositores de la plaza antes de elegir a los miembros de la mesa electoral. La parte derrotada se mudaba a la segunda plaza de la parroquia (...) Usualmente no había más violencia luego de los combates del domingo. Los dos, tres o más partidos respetaban el resultado de la lucha en dicho día por el control de la plaza principal y efectuaban dos, tres o más elecciones paralelas(...) También se daban procesos electorales paralelos cuando los delegados se reunían en la capital provincial para elegir a los miembros del Congreso (noviembre) o presidente (mayo). Por lo general había dos o tres colegios paralelos, cada uno de ellos conformado por un partido o facción de las

municipalidades de toda la provincia(...) Estas elecciones también estaban acompañadas por la violencia, al intentar cada partido impedir que su oponente realizara sus elecciones en la forma legalmente prescrita que exigía la acción pública, *inter alia*. El parlamento decidía cuál de los procesos electorales había sido legal (Mucke, 2004, p. 142)

A fines del siglo XIX, con la constitución del primer organismo electoral de nivel nacional, al que se le da la responsabilidad de organizar las elecciones en todo el territorio, comienza un largo ciclo de reformas para dar mayores garantías de limpieza y justeza a los procesos electorales. Pero sólo hacia 1963 coincidieron un contexto y una legislación con el objetivo de que no hubiera violencia ni fraudes sino una *verdad electoral*, como decía Víctor Andrés Belaúnde en su libro *Meditaciones Peruanas*. Pero luego vino el gobierno militar de los 70 y más tarde la dictadura civil militar de los 90.

Después del año 2000, con el restablecimiento de un marco democrático, el país tuvo una nueva oportunidad para consolidar un régimen institucional duradero y adecuado para los procesos electorales. Es en la libertad, limpieza y justeza de los procesos electorales donde se funda la legitimidad de los gobiernos en la era moderna.

Cabe destacar que todos los países que optaron por la democracia representativa como forma de gobierno han seguido una evolución parecida al Perú. Es decir, tuvieron al inicio procesos electorales sumamente violentos y turbios y fueron avanzando hacia procesos más frecuentemente pacíficos y, aunque si no enteramente justos, por lo menos bajo una cierta legalidad.

Dada la importancia de los procesos electorales para la legitimidad y la estabilidad de los gobiernos representativos, éstos se han convertido en un tema de interés internacional y por ello existen acuerdos internacionales que han establecido determinados estándares de lo que es una elección libre, justa y limpia (Reyna, Monsalve, Casalino, Parodi, 2004), a saber:

- Registros y padrones electorales universales, actualizados, incluyentes, no discriminatorios.
- Servicios electorales y centros de votación accesibles.
- Garantías para el voto secreto.
- Simpleza, claridad, difusión y transparencia de los procedimientos de votación y escrutinio.
- Simpleza e imparcialidad en el diseño de los materiales electorales.
- Igualdad de cada voto ciudadano en su incidencia sobre el resultado general.
- Libertades de expresión, de asociación partidaria y de campañas electorales en todo el territorio.
- Accesibilidad ciudadana a la información sobre las opciones electorales.
- Igualdad en el derecho a ser candidatos y garantías para ellos y sus familiares.
- Equidad en las campañas del partido de gobierno y las de sus opositores. Accesibilidad de los competidores a los medios de comunicación masiva.
- Garantías y seguridades para los electores y candidatos.
- Administración imparcial, transparente, y participativa del proceso electoral.
- Debido proceso y solución oportuna de los contenciosos electorales.
- Independencia y eficacia de la justicia electoral.
- Actuación pacífica de los partidos, candidatos y electores.
- Difusión pronta y clara de los resultados de las elecciones.
- Aceptación amplia de los resultados (pp.12)

Sin embargo, aun cuando las reglas y procedimientos pueden ser técnicamente irreprochables, su efectividad también depende de contextos o factores sociales,-e institucionales que garanticen su aplicabilidad.

De modo que esta investigación se justifica tanto desde el punto de vista de la investigación aplicada, dado que puede ayudar a entender y prevenir el desarrollo de situaciones de violencia electoral, como desde la investigación académica, porque pretende aportar al desarrollo teórico sociológico respecto de ese fenómeno.

Objetivos De La Investigación

El objetivo general de la investigación es proponer un modelo interpretativo y preventivo respecto al desencadenamiento de la violencia electoral local.

El objetivo específico es el de proponer una explicación respecto a las razones por las cuales hubo determinadas elecciones locales que en 2002 derivaron en situaciones de violencia que hicieron fracasar esas elecciones.

Marco Teórico

El Concepto De Violencia

Para precisar el problema al que estamos aludiendo debemos señalar lo que entendemos por violencia. Esta delimitación explica por qué se han considerado determinados sucesos y otros no, de los ocurridos en los procesos electorales locales analizados.

El principal referente teórico será una obra de la filósofa política Hannah Arendt (2006). En su concepto de violencia esta supone ataques físicos directos, eventualmente con el uso de implementos que potencian la fuerza del agresor. Esta manera de delimitar la violencia no incorpora en ella las dimensiones de lo potencial ni de lo psicológico. Estas dimensiones podrían ser centrales cuando el análisis corresponde a estudios de la salud o la sicología. No las incorporamos para mantener y no desbordar la perspectiva política de nuestro análisis.

Tampoco incorpora las dimensiones estructurales a las que se alude con la noción de violencia estructural, para no arriesgar una confusión con otros conceptos como explotación,

dominación o exclusión que, además de la confusión, nos expondría a un ámbito demasiado amplio –y poco manejable– de referentes empíricos.

Es por esto que recogemos la perspectiva de análisis de Arendt que precisamente opta por una concepción que toma la materialidad de la violencia como un elemento definitorio imprescindible para poder tomarla como objeto de estudio social y político.

En efecto, el enfoque de Arendt es uno de los pocos en los que el concepto de la violencia asociada a la política tiene un significado y unos referentes empíricos distinguibles que pueden ser manejables por la investigación y la discusión en las disciplinas sociológicas y politológicas. Llega a ello a partir de su objetivo de distinguir entre violencia y poder.

Bajo esa perspectiva, Arendt (2006) señala los siguientes elementos:

- La violencia siempre requiere de implementos, en el sentido de medios materiales
- Si está asociada a la política, o tiene pretensiones de ello, la violencia siempre requiere y va acompañada de una justificación. La violencia que se presenta como violencia política supone una justificación política. Por tanto, este tipo de violencia es instrumental, necesita invocar la justificación de un fin.
- Finalmente, la violencia no implica necesariamente la actuación de mucha gente, pues también puede ser intensa según los implementos con los que se ejerce. (pp. 40 – 43)

El enfoque de Arendt hace una diferencia interesante entre violencia y poder. Según la autora, el poder se refiere a la capacidad humana de actuar concertadamente, a la capacidad de generar consenso. Por ello requiere de grupos y eventualmente de mucha gente. En cambio, la violencia puede ser ejercida inclusive por pequeños grupos (Arendt, 2006, pp. 40 – 42).

Como el poder está asociado a la capacidad de generar consenso, lo que requiere es de legitimidad ante una parte significativa de la sociedad. En cambio, cuando la violencia, se asocia

o pretende asociarse a la política, y dado que puede ser ejercida hasta por pequeños grupos, lo que requiere es de una justificación.

La violencia y el poder suelen ir asociados, pero son muy distintos e incluso pueden ser mutuamente excluyentes. Es en situaciones extremas cuando se aprecia su mutua exclusión: el dominio de la violencia pura puede aparecer precisamente cuando el poder se está perdiendo (Arendt, 2006, p. 49). La impotencia puede derivar en violencia y esta misma a su vez también puede ser impotente e inefectiva para producir los objetivos políticos buscados.

Cuando se recurre a la violencia, es frecuente que los medios que se usan tengan efectos más profundos que los fines invocados. Igualmente, con frecuencia la violencia lleva implícita un cierto nivel de incertidumbre. Una vez iniciada, el desenlace en que terminan es altamente incierto.

También están asociados la violencia y la furia. Son dos reacciones humanas que pueden ser irracionales, pero también racionales y no puramente emocionales. Por ejemplo, pueden ser racionales ante situaciones percibidas como injustas (Arendt, 2006, p. 56). Pero esa racionalidad, es válida solo si es eficaz para conseguir los fines invocados.

Esta eficacia solo es observable si esos fines invocados son de corto plazo y no se refieren únicamente a un futuro indeterminado. Un fin de corto plazo puede ser el de llamar la atención, obtener la difusión de ciertas demandas. Como no se puede construir nada sobre la violencia, la eficacia de su uso consiste básicamente en hacer notar las reivindicaciones expresadas (Arendt, 2006, p. 70).

Factores asociados a la violencia en procesos políticos según Samuel Huntington y Giovanni Sartori

En lo que se refiere a factores que ayudarían a explicar por qué se desencadenan hechos de violencia en los procesos electorales, vamos a considerar, en primer lugar, la tesis de Samuel Huntington respecto a la violencia y la inestabilidad política en países en proceso de

modernización. Este autor sostiene que la causa central es la brecha entre la rapidez con que ocurren el cambio social y la movilización social y la lentitud con que se desarrollan las instituciones (Huntington, 1972, p.7).

En segundo lugar consideraremos, una explicación desde la politología. Tomaremos la reflexión de Giovanni Sartori que asocia la degeneración violenta de los procesos y campañas electorales a un cierto tipo de comportamiento político por parte de los competidores. Estos no actúan como partidos que compiten por expresar el interés común sino como facciones que tramitan el interés de solamente una parte de la circunscripción por encima de otra. El proceso resultante es el de una polarización de la campaña cada vez más aguda que eleva la probabilidad de violencia (Sartori, 2003, p. 17).

Hipótesis

Hipótesis General

Nuestra hipótesis general es que los incidentes de violencia ocurridos en varios de los distritos, durante las mencionadas elecciones de 2002, fueron condicionados por factores sociales e institucionales que, sean electorales o no directamente electorales, como una polarización extrema, llevaron a una degradación de la competencia electoral y luego derivaron en ataques físicos contra alguno de los actores o las entidades electorales.

Hipótesis Específicas

Primera Hipótesis Específica. Nuestra primera hipótesis específica pretende encontrar una explicación desde la sociología y, en particular, en la ya referida idea de Huntington respecto a la violencia y la inestabilidad en sociedades en proceso de cambio o modernización (Huntington, 1972).

En los distritos analizados habrían ocurrido cambios sociales y diferenciaciones de intereses que no han sido acompañados por el desarrollo de instituciones políticas que canalicen

la expresión de esos intereses diferenciados hacia alguna solución o transacción. En ausencia, o ante un bajo nivel de desarrollo de esas instituciones, y en particular de partidos políticos, habría una alta probabilidad de que los intereses diferenciados, al abrirse un proceso de competencia electoral, devengan en conflictos y luego en violencia.

Segunda Hipótesis Específica. La segunda hipótesis específica que vamos a poner a prueba refiere que, en los procesos y campañas electorales que degeneran en violencia, los grupos competidores o los partidos existentes no interactúan como partidos que buscan expresar el interés común sino como facciones que intentan prevalecer unas sobre las demás. Ello lleva a la polarización de la campaña y eleva la probabilidad de violencia..

Metodología

Como ya se mencionó, el objetivo general de la investigación es el de proponer un modelo interpretativo y preventivo; en otras palabras, un modelo teórico, respecto al desencadenamiento de casos de violencia electoral local en el Perú. El objetivo específico ha sido proponer una explicación respecto a las razones por las cuales hubo determinadas elecciones locales que en 2002 derivaron en situaciones de violencia que, a la postre, hicieron fracasar esas elecciones.

En relación al modelo interpretativo o teórico respecto a la generación de procesos o hechos de violencia electoral en el Perú, hemos desarrollado, en primer lugar, un trabajo de revisión bibliográfica y análisis de contenido de investigaciones sobre casos de violencia electoral.

Esto, con el objetivo de llegar a una formulación propia que responda a dos preguntas: ¿Qué es violencia electoral?, y ¿Por qué se generan los casos de violencia electoral? Consideramos imprescindible postularlo de esta forma para llegar al objetivo de la tesis de la presente investigación: proponer un modelo interpretativo sobre la violencia electoral.

Luego de culminar el primer capítulo de contenido teórico pasaremos, en los siguientes, a analizar lo ocurrido en los casos de violencia electoral escogidos para poner a prueba el modelo interpretativo surgido de esa primera parte teórica.

En el segundo capítulo, usaremos la información existente en el estudio de casos, ocurridos en las elecciones municipales de 2002, que el autor hizo para la primera publicación de ONPE sobre la violencia electoral en elecciones locales (Reyna, 2003). Aunque esta tesis se apoya en el mismo material informativo de aquel estudio, el análisis y conclusiones de cada caso, y las conclusiones generales, han sido reelaborados en función al marco teórico e hipótesis de esta tesis y los conceptos teóricos elaborados en el primer capítulo.

En el tercer y último capítulo, previo a las conclusiones, se analizará lo sucedido en el distrito de Samanco, en los años posteriores a las elecciones municipales distritales de 2002, en las cuáles esta tesis ha profundizado en mayor medida. Se trata de las elecciones que se desarrollaron en Samanco entre 2003 y 2015. Aquí no profundizamos en cada una de esas elecciones sino que trazaremos un cuadro panorámico de esa serie de elecciones para mostrar hasta donde puede llegar la violencia cuando no se llegan a superar los factores de la violencia que apareció en algún momento anterior.

La información sobre estos sucesos electorales y un hecho de extrema violencia asociado a uno de ellos, se ha obtenido de las fuentes disponibles en la Oficina Nacional de Procesos Electorales y en el Jurado Nacional de Elecciones sobre los procesos electorales involucrados entre 2003 y 2014, y en el Ministerio Público de Chimbote sobre el caso criminal ocurrido en 2015.

Primera Parte: Informe General De La Investigación

Capítulo I: Una propuesta de formulación teórica sobre la violencia electoral local y sus causas

Para arribar al objetivo de esta tesis, de encontrar explicaciones a la violencia electoral debemos, primero, definirla conceptualmente. Comenzaremos revisando críticamente los intentos de una definición presentes en varias investigaciones realizadas en Perú, específicamente en ONPE.

La Discusión Precedente De La Violencia Electoral Como Concepto

En la primera investigación realizada en ONPE (Reyna, 2003), siendo un trabajo más bien monográfico, no se trabajó teóricamente el concepto de violencia electoral, ni otro similar. En el segundo estudio, publicado en 2010, que analizó los casos de conflicto electoral de 2006, se incluyó una discusión sobre, precisamente, la noción de conflicto electoral, y se propuso la siguiente:

El desacuerdo de carácter público, que puede expresarse de forma violenta o no, entre grupos organizados de actores que compiten por el poder o entre estos y los organismos electorales, donde el factor de conflicto está dado por el rechazo o el presunto incumplimiento de algún procedimiento o regla electoral. (ONPE, 2010, p. 28)

Dado que el objeto de este estudio fueron los conflictos electorales, no se abordó el concepto de violencia electoral. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que no todo conflicto implica violencia, y que es justamente la violencia el fenómeno más extremo y riesgoso para un proceso electoral y por eso requiere de clarificaciones conceptuales y de investigaciones específicas.

En el estudio publicado por ONPE (2013), que trató los casos de conflicto y violencia electoral de las elecciones municipales de 2010 y 2011, sí se procuró una definición sobre el

concepto de violencia electoral, diferenciándolo del llamado conflicto electoral. Tomando aportes de estudios realizados en otros países, postuló lo siguiente:

considerando los trabajos precedentes podemos afirmar que la violencia electoral es un tipo de violencia política concomitante y concurrente al proceso electoral dirigida — conscientemente por los actores políticos y sus alianzas sociales— para intervenir en aquel, con el objeto de modificar las condiciones que permiten la libre expresión del voto u obligar a que este sea pospuesto por la supuesta ausencia de garantías necesarias (ONPE, 2013, p. 36)

Para poder establecer cuándo se aplica violencia en los conflictos electorales partimos de las definiciones encontradas de violencia electoral. Se muestran tres perspectivas:

- i) tipo especial de violencia política que amenaza el proceso político y se manifiesta a través de comportamientos negativos tendientes a romper los marcos democráticos y electorales
- ii) actos aleatorios u organizados que pretenden intimidar, dañar físicamente, destruir la propiedad privada u otra acción que influya en el proceso electoral
- iii) tipo de violencia política que se produce durante el proceso electoral; sin embargo, esta no es una violencia concomitante al proceso, sino dirigida por los actores participantes en él para poder ganar la elección o de lo contrario, afectar a través de ella la culminación del proceso electoral. (ONPE, 2013, p.37)

Estas delimitaciones conceptuales, planteadas por el estudio publicado por ONPE en 2013 son plausibles y nos acercan a los hechos o procesos que se consideran encarnación de la violencia electoral. Sin embargo, no queda claro, en ellas, qué es lo que define a ciertos hechos o situaciones

como violencia, dónde está el corte entre las situaciones o los hechos propios de un conflicto electoral en general, y las situaciones o los hechos que ya son propios de la violencia electoral.

En ese sentido, definir a la violencia electoral como un tipo de violencia política no resuelve la cuestión de qué es lo que hace, de ambas, manifestaciones de violencia y no de un conflicto.

Por otro lado, bien podrían ocurrir hechos de violencia electoral que no busquen romper los marcos democráticos sino, más bien, defenderlos cuando son amenazados por gobiernos o corrientes autoritarias. Igualmente, la llamada intimidación también podría ser un concepto muy difuso. Actos violentos pueden intimidar, ciertamente, pero la intimidación también puede ser un efecto de actos no violentos, tales como una manifestación pacífica masiva para disuadir a grupos que sí son violentos. Finalmente, la violencia puede provenir también de actores que no participan de un proceso electoral, sino que son ajenos a él.

De modo que lo propuesto, a manera de marco teórico, en la investigación publicada por ONPE en 2013, si bien fue un avance que aporta al esclarecimiento del concepto violencia electoral dejó aún sin resolver algunas necesarias precisiones.

En el estudio más reciente de ONPE se analizaron los conflictos violentos de las elecciones municipales de 2014 (ONPE, 2016). Se prefirió trabajar con el concepto de *conflicto electoral violento* y se definió como una suerte de fase agravada de un conflicto electoral. El agravamiento tenía que ver con el carácter físico de los enfrentamientos:

El conflicto electoral se define por el clima de agitación, generado tras determinados actos públicos de provocación entre las partes. En otras palabras, puede haber conflictos electorales *no violentos*.

Es cuando el clima de provocación y agitación incita la aparición de actos de violencia explícita, y cuando estos actos se transforman en el principal repertorio de acciones de las

partes enfrentadas; que podemos hablar propiamente de un conflicto electoral violento. (ONPE, 2016, p.26)

Previamente, el estudio deja entrever que lo que entiende por violencia explícita tiene que ver con el carácter físico de los enfrentamientos: “El conflicto hace referencia a una situación o condición de antagonismo entre una o más partes; mientras que la violencia supone el ejercicio explícito de la fuerza física entre estas partes” (ONPE, 2016, p.25).

Para esto también se apoyó en una definición de violencia propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y citada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS):

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y atenta contra el derecho a la salud y la vida de la población. (OPS, 2002, p. 5)

Esta manera de concebir el sentido de la violencia y la violencia electoral ya contiene una respuesta a la pregunta que hacíamos respecto de donde está la diferencia, la delimitación, que permite distinguir un conflicto electoral de la violencia electoral propiamente dicha: se alude al uso de la fuerza física como parte del enfrentamiento entre las partes.

Se trata de una respuesta plausible, pues además de responder a aquella interrogante, el uso de la fuerza física puede ser un buen referente empírico para detectar y diferenciar a la violencia de otros recursos típicos de una contienda electoral normal y pacífica, donde hay conflictos, pero no violencia.

Sin embargo, nos parece que en la perspectiva conceptual propuesta por el cuarto estudio de ONPE (2016), aún faltan algunos elementos que mostraran a la violencia electoral como un tema del campo de la política. Al fin y al cabo, la definición propuesta por la OMS y difundida por

la OPS se ubicaba en la perspectiva de análisis de la violencia como problema de salud, que es diferente de cuando se analiza la violencia desde una perspectiva política.

Una Propuesta Sobre El Concepto De Violencia Electoral

A continuación, propondremos, primero, una concepción propia de violencia electoral, que en algunos aspectos coincide y recoge lo desarrollado previamente entre 2003 y 2016 en los sucesivos estudios de ONPE, pero que toma como referente a las reflexiones formuladas, sobre todo, desde las disciplinas politológicas dado que estamos ante un fenómeno enmarcado en procesos políticos como los electorales.

El principal referente teórico sobre el concepto de violencia será la filósofa política Hannah Arendt (2006), en los términos que ya se expusieron en el marco teórico y concepto de violencia de esta tesis. Luego de exponer nuestra idea de lo que es violencia electoral, formularemos una tipología de la misma.

Adelantamos que bajo el concepto de violencia electoral consideramos a todos aquellos incidentes que tienen lugar en el marco de un proceso electoral, e implican la ocurrencia de ataques físicos directos de parte de ciudadanos, organizaciones políticas o autoridades públicas contra otros ciudadanos, organizaciones políticas, autoridades públicas o instalaciones y materiales de interés electoral o público, con el propósito de afectar el proceso electoral o sus resultados.

Esta manera de entender la violencia electoral delimita, primero, el sentido de lo violento. Remite ello a la realización de una agresión física directa, eventualmente con el uso de implementos que potencian la fuerza del agresor.

Debemos precisar, además, que en esta manera de delimitar la violencia no incorporamos las dimensiones de lo potencial ni de lo psicológico. Estas dimensiones podrían ser centrales cuando el análisis corresponde a estudios de la salud o la sicología, pero no las incorporamos para mantener y no desbordar la perspectiva política de nuestro análisis.

Tampoco incorporamos a las dimensiones estructurales, a las que se alude con la noción de violencia estructural, para no arriesgar una confusión con otros conceptos como explotación, dominación o exclusión que, además de la confusión, nos expondría a un ámbito demasiado amplio —y poco manejable— de referentes empíricos.

Esta opción conceptual la recogemos de la perspectiva de análisis de Arendt (2006) que ya hemos mencionado, la cual toma la materialidad de la violencia como un elemento definitorio imprescindible para poder tomarla como objeto de estudio social y político.

Hechas estas delimitaciones sobre la violencia, apoyadas casi totalmente en la reflexión de Arendt (2006), podríamos ahora demarcar la violencia electoral como aquella forma de violencia política que tiene las siguientes características:

- Ocurre en el marco de un proceso electoral.
- Involucra como agentes y/o como blancos, a los actores e instituciones de dicho proceso electoral.
- Está orientada a afectar al proceso electoral o a sus resultados.
- Se justifica a si misma con la supuesta infidelidad del proceso electoral o de sus resultados respecto a la voluntad popular invocada.

Tipos De Violencia Electoral

A la luz de las distintas manifestaciones que puede tomar la violencia electoral, creemos necesario plantear que esta tiene diversos tipos de expresiones. Una primera diferenciación que nos parece necesaria, en el plano de los conceptos, es aquella que diferencia la violencia electoral organizada de la violencia electoral reactiva.

La violencia electoral organizada se distinguiría por presentar los siguientes elementos:

- Tiene un objetivo político establecido antes de que se ejecuten los actos violentos
- Obedece a un plan más o menos elaborado.

- Se trata de una violencia que cuenta con alguna organización previa a los hechos mismos de violencia.

En cambio, la violencia electoral reactiva tendría como elementos distintivos a los siguientes:

- Son reacciones más o menos espontáneas,
- No son organizadas de antemano
- Ocurren frente a algún evento del proceso electoral que se desea rechazar, ya sea durante o al final de su realización.

Un caso de violencia electoral reactiva serían las primeras protestas violentas ocurridas en los días inmediatamente posteriores a la primera vuelta de las elecciones generales del 2000 en el Perú. Más típicas de esta categoría de violencia electoral reactiva podrían ser los incidentes violentos que ocurren durante elecciones en circunscripciones locales, a propósito de una exacerbación de la competencia o del rechazo de los resultados por algunos de los grupos competidores.

Ahora bien, dentro de la violencia electoral organizada nos parece necesario distinguir, primero, a la violencia electoral organizada pro sistémica. Esta corresponde a los actos de violencia cometidos por grupos que, en general, aceptan el sistema y las reglas políticas y electorales establecidas y también aceptarían su inclusión en ellas, pero rechazan frontalmente la forma en que están siendo manejadas.

Un caso de violencia electoral organizada pro - sistémica es el de la violencia manifestada en ciertas marchas de protesta contra la re reelección de Alberto Fujimori en abril y mayo del 2000 y que culminaron, varias semanas después, en la marcha de los Cuatro Suyos. Su objetivo era el de que se realizaran nuevas elecciones en reemplazo de las elecciones de ese momento, con las garantías de cumplimiento de las reglas que no se respetaron en las elecciones del 2000.

En segundo lugar, se puede distinguir a la violencia electoral organizada anti – sistémica. Esta corresponde a la violencia de los grupos que rechazan totalmente el sistema y las reglas electorales establecidas y apuntan a provocar su crisis y reemplazo por otras reglas que pueden incluso ser alternativas a las elecciones como medio de legitimación del gobierno. Es el caso de las acciones de boicot, sabotaje o terrorismo realizadas por grupos subversivos como Sendero Luminoso o el MRTA durante los años 80 y parte de los 90.

Luego de estas necesarias delimitaciones conceptuales podemos señalar sobre qué tipo de violencia vamos a enfocar nuestra tesis: El tipo de violencia electoral en que vamos a centrar este estudio es en la violencia electoral de nivel local, ya sea violencia electoral reactiva o violencia electoral organizada pro sistémica, pues estas, con todo y los estudios de ONPE, pueden reflejar con mayor fuerza la incidencia de factores sociales o institucionales más amplios que la sola voluntad de uno o más grupos o partidos.

La Indagación Sobre Las Causas De La Violencia Electoral En Estudios Precedentes A Esta Tesis

En el primer estudio de ONPE (Reyna, 2003) sobre la violencia electoral se analizaron los detalles de los procesos locales afectados, así como sus desenlaces, profundizando en tres de esos procesos locales. Aunque tuvo la debilidad de carecer de un marco teórico y conceptual que guiara su análisis, se postuló una explicación de las causas de la violencia. Esta se habría desencadenado debido, por una parte, a ciertos factores del contexto social y del contexto político previos a cada proceso electoral; y por otra, a factores directamente asociados al proceso electoral.

Entre los primeros, se aludió a las tensiones sociales, estilos de liderazgos, y polarizaciones sociales y políticas previas a cada proceso electoral. Entre los segundos, a diversos sucesos que formaron parte del proceso electoral mismo y agravaron las pugnas políticas, tales como alcaldes

reeleccionistas, normas electorales que inducían a la polarización, inadecuada información sobre los procedimientos de conteo de los votos, e imprevisiones en materia de seguridad.

Por lo tanto, aún sin contar con un marco conceptual, aquel primer trabajo esbozó alguna explicación plausible sobre procesos sociales y políticos que derivaban en violencia electoral.

En el segundo estudio (ONPE, 2010), que enfocó sobre los casos de conflicto electoral de 2006, se exploró una relación estadística entre la violencia electoral con variables como las condiciones sociales de los distritos, el perfil demográfico de los electores, la fragmentación política, o la existencia previa de conflictos electorales o procesos de revocatorias de autoridades municipales.

En cuanto a sus estudios de casos, aquellos fueron de tipo más cualitativo y bastante breves, y solo enfocaron en los aspectos conflictivos al interior de los procesos propiamente electorales.

Probablemente por estas limitaciones conceptuales y analíticas, el estudio de esos casos respecto a las causas de los conflictos electorales encontró solo factores puramente electorales y de corto plazo, como los siguientes:

- supuesta presencia de electores golondrinos
- rechazo a la postulación a la reelección del alcalde
- disconformidad con los resultados electorales (ONPE, 2010, p.105).

No se encontró mayor incidencia de otros factores más sociales o políticos, que, no siendo directamente electorales, pudieron haber incidido en la conflictividad electoral.

El tercer estudio (ONPE, 2013), trató los casos de conflicto y violencia electoral de las elecciones municipales de 2010 y 2011, e indagó los porqués de la violencia electoral mediante el análisis cuantitativo de la incidencia que pudieron haber tenido cinco variables:

antecedentes de conflictividad en los procesos electorales previos de 2002 y 2006, crecimiento atípico del listado de electores de las elecciones municipales del 2010 respecto a las elecciones municipales de 2006, aumento de la tasa de crecimiento del presupuesto municipal del año 2009 respecto al de 2006; y clima reeleccionista, es decir si en las elecciones de 2010 uno de los competidores era el alcalde en ejercicio. (ONPE, 2013, p.47)

Sin embargo, el resultado de este análisis fue que ninguno de estos factores explicaba de manera consistente por qué el conflicto electoral se expresó a través de actos de violencia (ONPE, 2013).

En cuanto a estudios de casos, este tercer estudio (ONPE, 2013) solo abordó un caso de violencia en las elecciones de 2010. Se trata del distrito de Huacachi, de la provincia de Recuay, en la sierra de Ancash. El proceso se frustró por la destrucción vandálica del material electoral y luego, en 2011, dos elecciones complementarias sucesivas fracasaron por el reducido número de votantes.

Se trató de un análisis solo descriptivo, sin ahondar en las posibles causas de la violencia en este caso. Por tanto, este tercer estudio de ONPE (2013) sobre violencia electoral no logró postular respuestas respecto al porqué de la misma para el caso de elecciones locales.

El cuarto y más reciente estudio (ONPE, 2016) analizó los conflictos violentos de las elecciones municipales de 2014. Al igual que los dos anteriores trató de encontrar los porqués de la violencia electoral, primero mediante un análisis cuantitativo de ciertas características socioeconómicas de los distritos afectados por los llamados conflictos electorales violentos. Encontró ciertas semejanzas y rasgos recurrentes. Entre los cuales se señalan ruralidad, pobreza, entre otros.

También realizó un análisis cualitativo, más enfocado en lo político electoral, de seis de los distritos afectados por los conflictos electorales violentos. Pero este análisis de lo ocurrido en esos casos, se circunscribió a los días inmediatamente anteriores y posteriores al día de la elección, en que ocurrieron los hechos de violencia. Por otro lado, enfocó sobre las razones aducidas o atribuidas por los participantes en dichos hechos.

Bajo este marco de análisis este último estudio de ONPE llegó a conclusiones similares a los estudios previos:

A pesar que el estudio ha encontrado un perfil sociodemográfico similar al registrado en años anteriores en los distritos donde hubo violencia electoral (...) no es posible determinar que este perfil sea un causal directo de la violencia, ni que otros factores «político- estructurales» estén involucrados (ONPE, 2016, p.82)

Los otros factores descartados a los que se refiere esta conclusión son los siguientes: antecedentes de conflictividad electoral, crecimiento atípico del padrón electoral, antecedente de revocatorias, aumento del presupuesto municipal y clima reeleccionista, los cuales ya habían sido descartados en el estudio inmediatamente anterior (ONPE, 2013).

A partir del estudio cualitativo de los seis casos, este cuarto estudio encuentra, igual que el segundo estudio de ONPE (ONPE, 2010), que:

(...) las causas de violencia identificadas por el Documento de Trabajo N.º 22 siguen siendo los principales motivos que impulsaron los actos de violencia durante las ERM 2014. Se trata de 1) la percepción sobre la presencia de electores golondrinos, 2) el rechazo a los resultados electorales —donde se incluye el rechazo a la reelección del alcalde—, y una causa añadida por el presente estudio, 3) las acusaciones de fraude electoral. En muchos casos, estas causas están asociadas entre sí, es decir, se sospecha que hay electores

golondrinos, existe una oposición a la reelección, se encuentran acusaciones de fraude y se rechazan los resultados electorales. (ONPE, 2010, p. 82)

Es decir que, igual que el segundo estudio, este cuarto estudio encuentra, como posibles factores explicativos del porqué de la violencia electoral, solamente a factores político electorales y de muy corto plazo.

Descarta como ya hemos anotado, otros factores más sociales, u otros que, siendo factores políticos, no son directamente electorales, pero pudieron haber incidido en el proceso de gestación de la violencia electoral.

Esta limitación de sus conclusiones posiblemente haya sido determinada por la restricción de su análisis político, en su estudio de casos, a lo ocurrido en los días inmediatamente anteriores o posteriores al estallido de dicha violencia electoral.

En el caso nuestro, creemos que sí es pertinente considerar otros factores explicativos más amplios y profundos. Así lo hemos consignado en las Hipótesis expuestas en el Planteamiento del Problema, tomando en cuenta la valiosa información consignada en el primer estudio (Reyna, 2003) respecto a la incidencia de los otros procesos y factores sociales y/o políticos de mediano plazo y de más allá de lo electoral.

Esos otros factores explicativos del porqué de la violencia electoral, nos parece que son la polarización existente desde antes de los procesos electorales, y las lógicas de facción imperantes por sobre las lógicas de partidos. No sólo porque saltan a la vista en los hechos narrados en el trabajo mencionado sino porque, como ya se mencionó en las hipótesis, son aportados por Huntington y por Sartori en sus trabajos sobre la inestabilidad o las crisis políticas.

Tales factores pueden haber quedado ocultos en los otros estudios sobre violencia electoral pues restringieron su mirada a cuestiones directamente electorales, o analizaron periodos cortos

inmediatamente cercanos a las elecciones investigadas. Y si consideraron algunos factores mas remotos, analizaron su incidencia por separado, aislando unos de otros, perdiendo de vista el proceso más de conjunto, la historia política local de mediano plazo.

Pasaremos ahora a revisar los hallazgos del primer estudio sobre violencia electoral (Reyna, 2003), pero ahora bajo la perspectiva del marco conceptual trabajado en este capítulo.

Capítulo II: Revisitando Un Estudio Monográfico Sobre Los Casos De Santa Cruz, Los Baños Del Inca Y Samanco En 2002

En este capítulo vamos a reprocesar el análisis de los casos de violencia electoral que se estudiaron en la investigación monográfica sobre violencia en procesos electorales municipales de 2002 publicado por ONPE en 2003.

En la Introducción a dicho estudio se decía: “se ha trabajado este documento de carácter más bien monográfico, aventurando algunas conclusiones a manera de hipótesis que dejan abiertas algunas pistas de utilidad para la organización de posteriores procesos electorales” (Reyna, 2003, p. 11). Ahora volveremos al análisis de esos casos, con el marco que nos da la perspectiva teórica trabajada en el primer capítulo.

Esta perspectiva teórica servirá, precisamente, para convertir esa monografía en un insumo para conclusiones de mayor consistencia, que sirvan para alcanzar el objetivo de esta tesis: un modelo explicativo y preventivo de la violencia en procesos electorales locales.

Como consta en aquel estudio, las elecciones municipales de aquel 2002 se realizaron en 1634 distritos y en 194 provincias. De todas estas circunscripciones, hubo hechos de violencia en 37 distritos y en una provincia de diversos puntos del país (Reyna, 2003, p. 63). En todos ellos, hubo ataques físicos a locales de votación, oficinas descentralizadas y a personal de la ONPE y JNE o a miembros de mesa.

También hubo destrucción o sustracción de materiales electorales, con el saldo, en algunos casos, de daños materiales y heridos. Como resultado hubo que anular las elecciones municipales en 9 distritos, las cuales tuvieron que volver a realizarse en 2003.

De todas las circunscripciones que padecieron de violencia electoral en 2002, el estudio mencionado escogió a la provincia de Santa Cruz y el distrito de Baños del Inca, ambos en Cajamarca y al distrito de Samanco, en Santa, Ancash. Veamos sus hallazgos y conclusiones y trabajemos con ellos a la luz de nuestra nueva perspectiva de análisis.

En el análisis de lo que ocurrió en la provincia de Santa Cruz en las elecciones municipales de noviembre de 2002, el estudio de 2003 encontró que esta tuvo algunos factores de la violencia que venían de antes del proceso electoral y otros factores que se manifestaron durante el proceso electoral. A los primeros, los reseñó así (Reyna, 2003):

(...) al inicio de la competencia electoral había un panorama dominado por cuatro tensiones:

1. Las derivadas de la condición de estancamiento, marginación y subordinación de la provincia frente a otros ámbitos de su entorno regional.
2. Los celos y desconfianzas entre la población citadina del distrito capital y la población de los distritos periféricos.
3. La competencia electoral entre los partidos institucionalizados en mayor o menor medida.
4. La presencia en esa competencia electoral de candidatos o líderes asociados al régimen que había hostigado a dichos partidos. (p.18).

En relación a los factores que incidieron en la violencia electoral ya en pleno proceso electoral, el estudio de 2003 los mencionó de la siguiente manera (Reyna, 2003):

Los incidentes de violencia contra los organismos electorales tuvieron como factores inmediatos a los siguientes: primero, la difusión de una falsa información inicial sobre los resultados electorales. Segundo, la desprotección policial de dichos organismos. Y tercero, el desconocimiento de los detalles que hacen improbable un fraude electoral cometido por los organismos electorales, lo cual llevó a una cierta desconfianza respecto a su independencia.(pp. 27 – 28)

A continuación el estudio añadió que esos factores inmediatos:

(...) convirtieron en una confrontación abierta una situación de tensión en la cual concurrían varios factores más permanentes. Primero, una sensación de marginación y subordinación por parte de todos los cruceños. Segundo, la aparente permanencia de un cierto tipo de liderazgos locales que recurren a prácticas clientelistas con fines electorales. Tercero, una cierta polarización social entre los cruceños urbanos de la capital de la provincia y los cruceños de los distritos periféricos, más rurales. Y cuarto, una polarización política entre un candidato reeleccionista apoyado sobre todo por los electores rurales y unos candidatos opositores apoyados por la parte urbana de la provincia. (Reyna, 2003, pp. 27 – 28)

A todos estos factores es pertinente añadir otros más permanentes o estructurales que también tuvieron incidencia en la violencia electoral. Uno de ellos es el de la pobreza de la provincia de Santa Cruz y sus distritos.

Hacia el año 2000, la provincia de Santa Cruz ocupaba el lugar 52 de todas las provincias más pobres del Perú, y en seis de sus once distritos, prácticamente el 100 % de sus hogares no tenían agua ni desagüe, y en ocho de ellos el 75 % de sus hogares no tenían electricidad (Reyna,

2003). Como suele suceder, el distrito capital de la provincia no estaba ente los distritos más pobres.

Por otro lado, el estudio encontró que aunque en la misma capital del distrito no se habían desarrollado diferenciaciones o desigualdades muy visibles, sí había una distancia que mantenían las antiguas familias de la ciudad respecto a los habitantes de los distritos periféricos: “citadinos y campesinos, una especie de eco de la separación entre criollos e indios” (Reyna, 2003, p. 17).

El estudio alude a ciertos cambios que pueden haber profundizado esa diferenciación y distanciamiento social entre citadinos de la capital provincial y la gente de los distritos, sea por una diferente afectación de la pobreza o por la diferencia socio cultural entre urbanos y rurales.

Entre esos otros hechos, algunos habrían significado un cierto empoderamiento de los distritos periféricos y un desmedro para el ámbito urbano. Por ejemplo, un mayor crecimiento demográfico de la periferia, y algunas medidas gubernamentales que tendieron a favorecer más a esos distritos que al distrito capital.

Las dos se dieron durante el gobierno fujimorista. Una de ellas, el Decreto Legislativo 776 de 1993, trasladó ingresos tributarios desde los municipios provinciales, que justo estaban ubicados en el distrito capital, hacia los municipios distritales. Esto favoreció a estos presupuestalmente. La otra medida, impulsó a programas sociales en mayor grado en estos mismos distritos.

El gobierno de Alejandro Toledo continuó estas medidas, originadas durante el gobierno de Alberto Fujimori y que obedecían a su conocida política clientelista, es decir, el uso de los recursos y programas del Estado para cooptar adhesiones políticas, sea entre alcaldes distritales o entre los electores (Reyna, 2003).

Lo que convirtió ese distanciamiento en una polarización, tanto social como política, es la disputa por el control de la municipalidad provincial de Santa Cruz entre candidatos asociados al distrito capital o centro urbano de la provincia, por un lado, y al ámbito de los distritos periféricos, por otro.

Ya en las elecciones municipales provinciales anteriores, en 1998, uno de los candidatos asociados a los distritos periféricos, Cruz Díaz Mego, que se presentó por el movimiento fujimorista Vamos Vecino, había ganado la alcaldía provincial por el 49.7 % de los votos válidos de la elección. Su lista ganó en los 6 de los 10 distritos de la provincia. Su principal adversario fue el candidato de la Lista Santa Cruz en Progreso, con mayor posicionamiento en el distrito capital. Este quedó en segundo lugar con el 41.8 % de los votos, y ganó en los otros 4 distritos (Reyna, 2003).

Esa polarización fue agudizada, además, por la debilidad o inexistencia de instituciones sociales o políticas en que se suele tratar sobre las expectativas populares. El estudio refiere, en relación a organizaciones sociales: “El tejido de las organizaciones locales para que la población tramite sus demandas no está muy desarrollado en esta pequeña ciudad” (Reyna, 2003, p.18). Y, en relación a organizaciones políticas, señaló que las políticas de clientelaje alentaron liderazgos más populistas que institucionales, que preferían “la relación directa con sus electores que el aliento a una organización política local” (Reyna, 2003, p.18).

Esa debilidad de los espacios para procesar los intereses generales o comunes, se puede interpretar, también debilita a los partidos u organizaciones políticas como agregadores del interés común. En su lugar, les abre paso a las lógicas de facción, donde prevalecen intereses particulares, y por tanto a la polarización.

Esta deriva polarizante en Santa Cruz es compatible con lo que han sostenido Huntington (1972) y Sartori (2003) en relación a los procesos que conducen a la polarización y eventualmente a la violencia y la inestabilidad política. El primero hace mención al desfase entre el cambio y la movilización social, más o menos rápidos, y el desarrollo lento de instituciones que los regulen y gestionen. Y el segundo, a la aparición y dominio de lógicas de facción que priorizan los intereses de un sector de la sociedad o de la política por encima de los intereses generales. La polarización resultante eleva la probabilidad de violencia.

En el caso de Santa Cruz, a estos factores sociales y políticos de mediano plazo y que precedieron al proceso electoral mismo, se sumaron, agudizando más la polarización, varios hechos que ya estuvieron dentro del proceso electoral. Entre ellos, el carácter reeleccionista de la postulación del alcalde en ejercicio, las acusaciones sobre el uso de recursos municipales para su campaña y la existencia en ese momento de una ley electoral demasiado indulgente con esas prácticas. El día mismo de las elecciones, la circulación de la versión de que los resultados electorales fueron adulterados para favorecer al alcalde reeleccionista y, finalmente, la desprotección en que las fuerzas del orden dejaron a los locales de ONPE y JNE (Reyna, 2003).

En conclusión, en el caso de la provincia de Santa Cruz, podemos llegar a una nueva formulación de los factores que condicionaron y determinaron que se desencadene la violencia electoral de 2002, tomando en parte lo señalado en el estudio de 2003, incorporando los elementos que acabamos de mencionar y colocándolo en la perspectiva teórica expuesta en el capítulo I.

Un primer factor es el proceso de diferenciación social y progresivo distanciamiento entre el distrito capital más urbanizado y los distritos periféricos más rurales, siendo estos últimos aquellos en los que se había concentrado la pobreza en mayor medida.

Un segundo factor es el de varios cambios importantes que favorecieron a los distritos periféricos en desmedro del distrito capital, reduciendo el poder de este último. Entre ellos, su crecimiento demográfico, los mayores ingresos tributarios que tuvieron los distritos periféricos en desmedro del distrito capital, y el haber sido beneficiarios de programas sociales en mayor medida que el mismo distrito capital. Esto implicó un descontento adicional a este distrito, configurándose una polarización social entre esos ámbitos de la provincia.

Un tercer factor es el de la debilidad de las organizaciones sociales y los partidos políticos en la provincia, los cuales, por esa razón, tenían límites para canalizar las demandas generadas por el crecimiento demográfico y otros cambios. Quienes terminaron canalizando esas demandas fueron líderes clientelistas que hacían política siguiendo lógicas de facción, mas particularistas y confrontacionales que las lógicas de partido. Estos son elementos que, como lo advirtieron en sus trabajos tanto Huntington (1972) como Sartori (2003), producen inestabilidad y violencia.

Un cuarto factor, que abrió la posibilidad de convertir la polarización social en polarización política, es la existencia en 2002, y por varios años más, de la Ley de Elecciones Municipales 26864, la cual permitía la reelección de los alcaldes en ejercicio vigente, y a la vez era muy indulgente con el uso de los recursos municipales para las campañas de los alcaldes candidatos.

Con la existencia de esa ley, luego de que un candidato a alcalde, apoyado por los distritos periféricos, ganó la Municipalidad Provincial al candidato del distrito capital, la posibilidad de una polarización política entre las dos partes de la provincia quedó instalada. Hasta aquí cinco factores sociales y políticos que vienen de antes del proceso electoral del 2002. Algunos de mucho antes y otros de poco tiempo antes.

Un quinto factor aparece al iniciarse el proceso electoral de noviembre de 2002, y al postular efectivamente, el alcalde en ejercicio, a su reelección. Con esta nueva situación, la

polarización política se hace realidad y se agudiza pues la competencia electoral se impregna de desconfianza. Los opositores al alcalde candidato le atribuyen haber trasladado electores de otras provincias para que voten en Santa Cruz y otras prácticas turbias. Aunque no hubo evidencias de esto, ello da cuenta de la agudeza de la polarización.

Un sexto factor es de naturaleza informacional – comunicacional y ocurre el mismo día de la votación. Tiene que ver con la diferencia entre los resultados que se conocieron antes que se culmine el conteo de los votos y los resultados que se conocieron al terminar el mismo. Esa diferencia generó convicción sobre un fraude entre los partidarios de los candidatos del distrito capital. Ese fraude habría favorecido al alcalde candidato. Este factor disparó la disposición, entre un grupo de los perdedores, para pasar a actos violentos.

Un séptimo factor es la desprotección en la que quedaron los locales de los organismos electorales ONPE y JNE por el retiro prematuro de las fuerzas de seguridad. Esto último es lo que decide que se cometan finalmente los actos violentos en contra de esos locales y de algunos de sus trabajadores.

Finalmente, la violencia electoral ocurrida en Santa Cruz, en noviembre de 2002, de acuerdo a la tipología planteada en el capítulo I de esta tesis, fue una de violencia electoral reactiva, caracterizada por ser una reacción espontánea, no organizada de antemano, no antisistema electoral y que ocurrió frente a un evento electoral que se quiso rechazar.

Pasemos ahora a Los Baños del Inca, que es un distrito ubicado en Cajamarca, como la provincia de Santa Cruz, pero mucho más integrado, en cuanto a vialidad y comunicaciones, por su cercanía a la capital de la región, menos de 10 kilómetros, y por los atractivos turísticos del distrito.

Sin embargo, en el distrito existían, hacia 2002, unos 64 centros poblados. El 79% era rural, el 41% no tenía conexión domiciliaria de agua potable y el 61% no la tenía en cuanto a electricidad. En cambio el centro urbano del distrito, como suele suceder estaba visiblemente mejor provisto. Esto ya marcaba una diferenciación social entre estos ámbitos, y eso iba a incidir en la competencia por la Municipalidad distrital (Reyna, 2003).

Luego del análisis que hizo el estudio publicado en 2003 por ONPE, las conclusiones a las que llegó sobre los factores que incidieron en la violencia electoral ocurrida en Los Baños del Inca, en las elecciones de noviembre de 2002, fueron las siguientes:

(...) se aprecia una bifurcación de intereses entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Hay elementos económico-sociales que intervienen en esta *diferenciación de intereses* [énfasis agregado], tal como el desigual *impacto que la inversión inmobiliaria y las operaciones mineras tienen en uno y otro ámbito* [énfasis agregado]. Pero esa diferenciación es *profundizada por una gestión política que habría apelado al clientelismo* [énfasis agregado] para tomar posición de ventaja en los medios rurales. Tal gestión política habría *reproducido a nivel local el esquema de liderazgo clientelista que primó a nivel nacional en el régimen político de los 90* [énfasis agregado]. Su vinculación con dicho esquema se expresó en la anterior pertenencia del alcalde candidato a las filas del movimiento Vamos Vecino. *Este tipo de liderazgo en la localidad, sin embargo, provocó un foco de oposición en el ámbito urbano, cuya resistencia derivó hacia una polarización política del proceso electoral* [énfasis agregado]. Esta llegó a tal nivel de intensidad que *afectó a la imagen de los organismos electorales, de cuya imparcialidad y confianza llegó a dudarse en* [énfasis agregado] algunos sectores opositores.

Tal polarización llegó a su punto máximo de tensión durante la misma jornada electoral, en donde nuevamente aparecen *el tema de la desinformación propalada por una radio y la desprotección*

policial [énfasis agregado]. Sin embargo, estos elementos son solamente los desencadenantes de los disturbios, siendo *el problema de la desconfianza entre los actores políticos, y sus determinaciones sociales y políticas, la explicación de fondo de la violencia* [énfasis agregado] con que el conflicto político terminó por expresarse. (Reyna, 2003, p.40)

Además de lo señalado en estas conclusiones, el estudio en mención, en el capítulo dedicado a este distrito, muestra un conjunto adicional de detalles en los cuales se advierte una secuencia de procesos y acontecimientos muy parecidos a lo ocurrido en Santa Cruz.

Efectivamente, también hubo, en primer lugar, una diferenciación social entre un centro urbano notoriamente más favorecido en lo económico y en cuanto a comunicaciones, que el ámbito de la periferia rural más pobre y menos comunicada.

En segundo lugar, hubo varios cambios, ocurridos en el distrito desde comienzos de los 90s, que profundizaron esa diferenciación social, al punto de convertirla en polarización social. El acontecimiento que desata esos cambios y esa mayor diferenciación, es el comienzo de las operaciones de la Minera Yanacocha, la primera gran empresa minera moderna que vino a instalarse a comienzos de los años 90 a pocas decenas de kilómetros de Los Baños del Inca. Los impactos positivos se concentraron, sobretodo, en el centro urbano del distrito, y los negativos en la periferia rural.

Entre esos cambios estuvo la dinamización del mercado inmobiliario en la parte urbana del distrito. Debido a la belleza de sus paisajes, numerosos funcionarios de Yanacocha compraron terrenos o viviendas en las zonas más atractivas de ese ámbito urbano e hicieron allí sus viviendas. Ese desarrollo inmobiliario, junto con otros cambios ocasionados por la presencia de la mina, aumentaron la demanda de bienes y servicios, lo cual fue positivo para los negocios del ámbito urbano, los cuales pudieron prosperar.

En cambio, los impactos colaterales negativos, referidos por los entrevistados por el estudio de 2003, afectaron sobre todo a la población rural. Hubo encarecimiento de los precios de los productos y servicios de proveedores urbanos, reducción de tierras de pastoreo, deterioro de los pastos y calidad del agua, y mejoras muy reducidas de las vías de comunicación hacia los centros poblados del distrito. Los precios de los productos agropecuarios mejoraron un poco también pero el saldo fue desfavorable para los pobladores del campo. Finalmente, las expectativas de empleo en Yanacocha, que tenían estos pobladores, no se hicieron realidad (Reyna, 2003). Esto hizo que la diferenciación social se convirtiera con más claridad en una polarización social.

En tercer lugar, como en Santa Cruz, hubo un posicionamiento territorial de los candidatos. Algunos trataron de expresar al centro urbano y otros a la periferia rural. Con esa polaridad de posicionamiento era más probable que, en la campaña, esos candidatos siguieran lógicas más faccionales y confrontacionales, que comunitarias y consensuales.

Estas características de los actores políticos locales hacían más probable que la polarización social se convirtiera en polarización política. Como ya hemos visto, los cambios sociales, la precariedad institucional, y las lógicas de facción, provocan polarización. Y esta, si ocurren acontecimientos que polarizan todavía más, desembocan en violencia, como lo señalaron Huntington (1972) y Sartori (2003).

En cuarto lugar, como es obvio, en las elecciones de Los Baños del Inca también regían, como en todo el país, aquellas normas legales que, primero, posibilitaban la postulación de los alcaldes a la reelección, y segundo, no garantizaban sanción efectiva a los alcaldes que usaran recursos de su municipalidad. Por tanto, era una legislación que incrementaba la posibilidad de polarización en caso de que el alcalde en ejercicio fuera candidato a la reelección.

Hasta aquí los factores que era propicios para la polarización política de la campaña electoral y que venían de antes del proceso electoral. Veamos ahora los factores que aparecieron durante la campaña electoral misma.

El quinto factor, el que convirtió la polarización política potencial en una polarización real, ocurrió con la inscripción de la candidatura del alcalde en ejercicio, Santos Julio Dávila Silva, intentando su reelección. Este había ganado la elección municipal distrital anterior de 1998 y había sido candidato del movimiento fujimorista Vamos Vecino.

En 2002 fue por la reelección pero como candidato de una lista local, Fuerza Campesina. Con ello se convirtió en el principal adversario del resto de candidatos, en particular de los posicionados en el centro urbano. Y parte del debate de la campaña fueron las versiones sobre sus presuntos actos de corrupción en la Municipalidad y el uso de las obras municipales para ganar apoyo de los centros poblados rurales (Reyna, 2003).

En sexto lugar, otra vez como en Santa Cruz, hubo incidentes de tipo comunicacional o informativo, que acentuaron la polarización o que la atizaron a tal punto que determinaron el pase a las acciones violentas. Uno de ellos fue la utilización de un hecho que, para los opositores, demostró la supuesta complicidad del personal de los organismos electorales para favorecer la reelección del alcalde Santos Dávila. Se trató del alojamiento del personal electoral, que vino de fuera, en un albergue de propiedad precisamente de la Municipalidad conducida por Dávila. No había nada formalmente irregular en esto, pero usarlo como evidencia de algún arreglo ilegal muestra el clima de desconfianza y polarización que fue creciendo.

El otro incidente comunicacional tuvo que ver con el rumor, antes de que culminara el conteo de votos, de que el ganador de la elección iba a ser el candidato reeleccionista. Este rumor, más la constatación de que el local de votación estaba sin protección suficiente por parte de las

fuerzas del orden, determinaron que grupos de los opositores a la reelección del alcalde se lanzaran a cometer los actos violentos.

En este caso, sí se cometieron actos de destrucción del material electoral crítico, como cédulas de votación y ánforas, lo cual determinó que se cancelara la votación y tuvieran que haber nuevas elecciones posteriormente. En cuanto a tipo de violencia electoral, fue reactiva, espontánea, no antisistema electoral ni antisistema político.

Por lo tanto tenemos, en Los Baños del Inca, una secuencia de factores de violencia muy semejante a la de Santa Cruz: Una diferenciación social, la aparición de cambios que la convierten en polarización social y polarización política, y acontecimientos que agudizan la polarización durante la campaña. Finalmente algunos incidentes comunicacionales o informativos y desprotección policial del proceso electoral o de las instituciones electorales terminan desencadenando la violencia. En este distrito, como en Santa Cruz, la violencia electoral, fue reactiva, espontánea, no antisistema electoral ni antisistema político.

Veamos ahora Samanco, que es un distrito plenamente costero, ubicado al extremo Sur de la provincia de El Santa, departamento de Ancash. Está a unos 34 kilómetros y 40 minutos por carretera de Chimbote, el puerto pesquero y siderúrgico que es capital de la provincia. Hacia 2002 Samanco tenía 2324 electores y unos 4400 habitantes distribuidos entre la pequeña ciudad de Samanco y unos diez centros poblados ubicados en ámbitos más bien rurales.

El centro urbano es la parte propiamente costera del distrito, junto con los balnearios de Los Chimus y Vesique. Es la sede de la Municipalidad y allí se ubican los principales servicios del distrito. Allí también residen los samanqueños que se dedican a la pesca, su actividad históricapor la proximidad al mar. En ese centro urbano, antes hubo actividad pesquera industrial, con

fábricas y actividad portuaria, pero las crisis y vedas de la pesca desde los años 70s hicieron colapsar esa actividad y hacia 2002 la pesca languidecía

Por su parte los habitantes de los centros poblados se dedicaban a la agricultura de productos de pan llevar o a la producción de materiales de construcción como adobes, arena o piedra chancada, pero hacia 2002 ninguna de esas actividades conseguía despegar (Reyna, 2003).

Por lo tanto, en 2002 no se veía mayor desigualdad económica entre la ciudad de Samanco y los centros poblados del distrito. En la ciudad había algo más de comodidad por la disponibilidad de electricidad y telefonía en los domicilios y un mayor servicio de transporte. Pero allí, como en los centros poblados se carecía de conexión domiciliaria de agua potable, y la carencia de empleo determinaba que parte de la población en edad de trabajar, tanto del centro urbano como de los centros poblados, tuviera que desplazarse a Chimbote para trabajar.

Sin embargo, aún si no había mayor desigualdad económica, sí había una clara diferenciación entre la actividad de los samanqueños urbanos, orientados a la pesca y al mar, y las actividades de los samanqueños de los centros poblados rurales, dedicados a diferentes formas de producción con la tierra, agricultura o materiales de construcción.

Y, por otro lado, existía la diferencia relacionada al origen de ambas partes del distrito. La del centro urbano del distrito reclamaba ser la parte legítimamente samanqueña, la de los descendientes de los antiguos habitantes de Samanco. Por tanto, con un supuesto mayor derecho a gobernar el distrito y no veía con buenos ojos a los habitantes de los centros poblados, de origen migrante, provenientes de otras regiones diferentes.

A su vez, los residentes en los centros poblados sentían que los alcaldes del distrito que pertenecían a la parte urbana no les prestaban importancia. Este celo mutuo había ido creciendo conforme los centros poblados fueron creciendo. Y creció más, de parte de los samanqueños

urbanos, cuando un líder proveniente de los centros poblados comenzó a ganar repetidamente la alcaldía del distrito a lo largo de los años 90 (Reyna, 2003). A la larga esta diferenciación y celo derivó en los hechos de violencia de las elecciones municipales de 2002 en el distrito. Antes de continuar, veamos las conclusiones a las que llegó el estudio de 2003 sobre las causas de dicha violencia electoral:

En el distrito de Samanco, entonces, tenemos, un contexto que combinó, primero, unas expectativas de progreso local insatisfechas por el estancamiento de la economía local y, segundo, una diferenciación y bifurcación de intereses entre el ámbito del puerto y el de los anexos de agricultores. Esta divergencia de intereses se acentuó por el tipo de liderazgo del alcalde, al que se le cuestiona por sus prácticas clientelistas en los anexos y por usar los recursos de la municipalidad a favor de su campaña electoral. La tensión es agravada por el hecho de que dicha autoridad iba a su tercera reelección y, durante su gestión, se le percibió como un aliado de Vamos Vecino, un movimiento que ya venía, a nivel nacional, con serias acusaciones de clientelismo y de irregularidades electorales. Esto generó un fuerte polo de resistencia en el puerto. La polarización no alcanza a ser distendida por los organismos electorales pues la demanda de depuración de golondrinos del padrón no llega a ser satisfecha. El conflicto llega a su clímax el mismo día de las elecciones. Los desencadenantes de la violencia fueron la información precoz de que el triunfo iba a corresponder al alcalde, la reducida protección policial y la reacción violenta de determinados dirigentes opositores que alentaron a la turba que atacó el local de votación y destruyó las actas electorales (Reyna, 2003, p.54)

Efectivamente, el alcalde que postulaba a su reelección en 2002, Teodoro Casana Escobedo, había sido elegido alcalde de Samanco, por primera vez, en las elecciones municipales distritales de 1993. Entonces postuló en una lista del Partido Popular Cristiano, que ganó las

elecciones dejando en segundo lugar a una lista independiente provincial denominada Frente de Unidad Popular (JNE, 1993).

Posteriormente, en 1995, ganó las mismas elecciones y el mismo cargo postulando por la lista Juntos para el Desarrollo, una lista de nivel provincial que dejó en segundo lugar a otra lista del mismo nivel llamada Movimiento Independiente Región Chavín. Y en 1998 obtuvo una tercera elección, esta vez postulando por la lista de Somos Perú, un partido nacional formado por un antiguo miembro del Partido Popular Cristiano, el alcalde de Lima, Alberto Andrade. Somos Perú fue el partido por el que Teodoro Jaime Casana Escobedo postuló en todas las elecciones posteriores en las que participó. En 2002 iba por su cuarto período sucesivo como alcalde.

La gente de los anexos o centros poblados referían que los alcaldes anteriores a Casana solo gobernaron para el centro urbano y marginaron a la periferia del distrito. Los habitantes del centro urbano sostenían que Casana privilegiaba a los centros poblados, porque era su base de apoyo. El centro poblado que era su principal punto de apoyo fue Huambacho, de donde era él.

Las diferencias y el celo entre ambas partes del distrito no encontraron un espacio común para resolverse. Hacia 2002, en el centro urbano solo había dos organizaciones sociales, una Junta de Pescadores Artesanales y el Frente de Defensa de Samanco. La de los pescadores, por supuesto, tenía su base en el centro urbano y no tenía mayor afecto por el alcalde Casana. Y el Frente de Defensa, tenía como motivo de su existencia precisamente el de oponerse a Casana. En Samanco no había ONG, ni medios de comunicación locales (Reyna, 2003).

Tampoco la Municipalidad era un espacio ideal para la distensión entre los samanqueños, porque la distribución de los regidores por la ley electoral municipal le daba el control casi absoluto del municipio al alcalde. De cinco regidores, cuatro se los asignaba a los partidarios del alcalde.

De manera que cuando Casana presentó su postulación a una nueva reelección, ya la diferenciación se había convertido en una polarización social, y esta se convirtió en una abierta polarización y confrontación política cuando inscribió su nueva candidatura.

A partir de este momento comenzaron a intensificarse las acusaciones mutuas entre los opositores a Casana y sus partidarios. Al alcalde se le acusaba de no haber resuelto el abastecimiento de agua potable en el puerto y de otras irregularidades administrativas y tenía procesos abiertos en Ministerio Público y Contraloría.

También se le acusó, como candidato, de usar la inversión municipal y el presupuesto municipal para lograr adhesiones y respaldo a su candidatura. Y el tema más sensible e irritante para sus opositores era la versión de que acarreaba electores desde otras circunscripciones para que voten por él en Samanco. Es decir, la práctica de los *golondrinos*.

Esta acusación, como no motivó ninguna reacción de parte de los organismos electorales, y probablemente fue así porque no hubo acusación formal de los anti Casana al respecto, llevó a que las críticas de estos se extendieran hacia dichos organismos electorales por su supuesta complicidad con él. Quienes apoyaban a Casana, normalmente habitantes de los centros poblados, se justificaban en que este alcalde sí se preocupaba por ellos. Señalaban también que los del otro lado estaban movidos por puro afán político o de negocios (Reyna, 2003).

Con este clima de polarización es que se llegó al día de la elección, que en el lenguaje de la Oficina de Procesos Electorales se denomina Jornada Electoral. Todas las mesas electorales se ubicaron en un único local de votación, un colegio ubicado en el centro urbano del distrito. En la parte final de la jornada, cuando ya se había avanzado el escrutinio de las mesas, empezó a correr la voz de que Casana volvía a ganar la elección e iba a ser electo por cuarta vez consecutiva. Eso

provocó la reacción iracunda de sus opositores. Y al percatarse de que no había mucha vigilancia policial, asaltaron el local, agredieron a personal de la ONPE y destruyeron los materiales.

El estudio de 2003 recoge interesantes versiones de uno y bando respecto a los actos de violencia de esa tarde. Fue en una cantidad lo suficientemente grande como para que se cancelara el proceso y más adelante se tuviera que convocar a una elección complementaria, junto con otras que por razones parecidas también se frustraron en noviembre de 2012.

En conclusión, con algunas diferencias, en el caso de Samanco, provincia de Santa, Región Ancash, vemos prácticamente la misma secuencia o proceso que en la provincia de Santa Cruz o el distrito de Los Baños del Inca, ambas circunscripciones de la región Cajamarca.

Es decir, en el caso de Samanco tenemos también factores o procesos que anteceden al proceso o a las campañas electorales mismas, entre los cuales, primero, la presencia de pobreza significativa en el distrito con sus principales actividades estancadas, como son la pesca, agricultura o la producción de materiales de construcción.

En segundo lugar, un proceso de diferenciación y distanciamiento social entre el centro urbano, que es a la vez el ámbito propiamente costero y pesquero del distrito, en donde están las sedes de la municipalidad y principales servicios públicos, y el ámbito rural de los centros poblados periféricos, dedicados a la agricultura y a los materiales de construcción.

No hay tanto una diferenciación en el sentido de desigualdad de niveles económicos, entre menos pobres y más pobres; sino una diferencia social entre urbanos y rurales, o entre pescadores y gente dedicada a trabajar la tierra, y entre centro político y periferia del distrito.

En tercer lugar, esta diferenciación social, comienza a convertirse en diferenciación política y luego en polarización, cuando un representante o líder de los centros poblados de la periferia comienza a competir por el control de la Municipalidad distrital y obtiene triunfos sucesivos. Ello

genera animadversión entre los del centro urbano que reclaman tener más derechos para gobernar el distrito por descender de los habitantes más antiguos mientras que los de los centros poblados serían advenedizos migrantes. Estos a su vez reclaman su derecho a gobernar por el olvido en que los tenían los alcaldes anteriores a Casana.

En cuarto lugar, no existían en Samanco alguna o algunas organizaciones sociales o instituciones estatales que pudieran servir como instancias de diálogo para atenuar el proceso de polarización. La Municipalidad estaba controlada por el alcalde y las dos de corte social estaban controladas por sus opositores. Los cambios sociales sin desarrollo institucional y la lógica de facción y la polarización señalados por Huntington (1972 y Sartori (2003) abrían una ruta hacia la violencia.

En quinto lugar, al ingresarse al proceso electoral mismo, toda esta polarización se acelera bruscamente cuando, después de ganar tres veces sucesivas la alcaldía de Samanco, el alcalde en ejercicio inscribe su candidatura y, junto con la reacción frontal de sus opositores, la confrontación se desencadena y se inicia un intercambio de fuertes ataques entre el candidato reeleccionista y sus opositores.

Estos se sienten legitimados además porque sus denuncias sobre malos manejos económicos en la Municipalidad, por parte del alcalde, van paralelas a procesos ya abiertos por Contraloría General de la República y por el Ministerio Público.

En sexto lugar, las denuncias del acarreo de electores desde otras circunscripciones (golondrinos) hacia Samanco para que voten por el alcalde candidato, terminan generando desconfianza hacia los organismos electorales, pues los opositores percibieron que ellos pudieron hacer algo, pero no lo hicieron. Más allá de si esta acusación tenía o no fundamento, sí afectó la imagen de imparcialidad de dichos organismos, lo cual es algo crítico para un proceso electoral.

En séptimo lugar, aparecieron, como en los dos casos anteriores, un incidente informativo o comunicacional y otro relacionado a la seguridad que obraron como desencadenantes de la violencia. El primero fue la versión, cuando el escrutinio de las mesas estaba por culminar, de que el alcalde reeleccionista estaba volviendo a ganar, provocando la ira de sus opositores. Y el segundo fue la insuficiente protección policial para el local de votación. Ambas cosas propiciaron que se materializaran los actos de violencia, la destrucción del material electoral y la anulación del proceso electoral en Samanco.

Capítulo III: Samanco 2003 - 2014: Polarización Irresuelta Y Desborde De La Violencia

Después de las anuladas elecciones de 2002, las obligadas elecciones municipales complementarias de Samanco se realizaron en julio del 2003, esta vez con una mayor protección policial y militar.

En esa ocasión, el número de listas competidoras participantes fue menor que el de las elecciones de noviembre de 2002. En estas últimas fueron 9 organizaciones competidoras, 8 partidos nacionales y una organización provincial. En las complementarias de 2003 fueron solamente 6 partidos nacionales.

Casana Logra Su Cuarta Reección

Aunque hubo una disminución de listas participantes, la polarización no debe haberse reducido pues Teodoro Casana insistió en postular de nuevo y eso en sí mismo polarizaba bastante. Pero cuando se supo que había ganado no hubo reacciones de protesta porque, esta vez, la presencia de fuerzas armadas y policiales era suficiente para disuadirlas.

Efectivamente, Casana, encabezando la lista de Somos Perú, obtuvo el 33.9% de los votos válidos, una apreciable ventaja sobre su más cercano competidor, Carlos Enrique Meléndez Bismarck, de Perú Posible, que había obtenido el 26.9% de los votos. En tercer lugar se ubicó Juan

Timoteo Jiménez Loayza, del Partido Aprista Peruano, con el 20.3% de los votos; y en cuarto, José Julián Baca Vivar, del Frente Independiente Moralizador, con 16.7% de los votos (JNE, 2015).

Las Tres Derrotas De Casana

Nuevamente reelecto, el alcalde Teodoro Jaime Casana pudo continuar con su labor hasta terminarla en 2006. En esa oportunidad volvió a tentar una quinta elección consecutiva pero ya no tuvo éxito. El triunfo le correspondió esa vez a Carlos Enrique Meléndez Bismarck que dejó a Perú Posible, con el que compitió en las complementarias de 2003, y postuló en 2006 por el Movimiento Independiente Nueva Esperanza Regional Ancashina, obteniendo 41.2% de los votos válidos (JNE, 2015)

En segundo lugar quedó Casana, siempre postulante por el Partido Somos Perú, que obtuvo el 32.1%, y, en tercer lugar, Teófila Elvira Gargate Sánchez, del Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso, quien obtuvo el 26.6 % de los votos.

Esas tres listas, dos regionales y otra de un partido de nivel nacional, fueron las únicas que compitieron en 2016. Aunque derrotado esta vez, Casana iba a seguir siendo un protagonista de la política samanqueña por varios años más.

Tres años después de que el entonces alcalde electo, Meléndez Bismarck, asumiera su cargo, apareció nuevamente otro indicio de polarización. Un grupo de samanqueños promovió que él y todos sus regidores sean sometidos a consulta popular de revocatorias.

El promotor formal de esa consulta fue el ciudadano José Isidro Romero Urbina y entre las motivaciones que tuvo que presentar para registrar su iniciativa figuraron las siguientes: abandono de proyectos y obras, abuso de autoridad, incumplimiento de promesas electorales, sobrevaloración de las obras públicas, no entregar los documentos que se les solicita, y no rendir cuentas (JNE, 2015).

Como estaba normado, esas motivaciones, que en buena medida eran acusaciones, no tenían que ser probadas o sustentadas porque el sentido de las revocatorias era expresar confianza o retirarla, sin mayor sustento.

La consulta se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2009 junto con otras 71 circunscripciones en todo el país. De un total de 2764 electores, participaron 2287 votantes. Como se sabe, la votación a favor o en contra es de regidor por regidor, registrándose distintas votaciones por el *sí* o por el *no* de la revocatoria del cargo de los regidores. El hecho es que en ninguno de los casos de las autoridades municipales ganó la opción de revocarles sus cargos (JNE, 2015).

No fueron revocados ni el alcalde ni algunos de los cinco regidores, de los cuales cuatro eran de su misma lista, Movimiento Independiente Nueva Esperanza Regional Ancashina, y uno de la lista opositora, Partido Somos Perú.

En cada caso ganaron los votos por el *no a la revocatoria* y el alcalde Meléndez Bismarck y sus regidores pudieron continuar hasta el fin de su período (JNE, 2015). Sin embargo, la materialización de la consulta quedó como un indicio de una polarización latente aún en Samanco.

Un año después de esta revocatoria, en 2010, hubo nuevas elecciones municipales, el alcalde en ejercicio de Samanco, Carlos Meléndez Bismarck, postuló para su reelección. Esta vez lo hizo por otro movimiento regional, Río Santa Caudaloso, liderado por uno de los empresarios pesqueros más notorios de Chimbote, Guzmán Aguirre Altamirano. Este había postulado en 2006 para alcalde de la Municipalidad Provincial de El Santa y había ganado la elección. En 2010, estaba postulando también para la reelección.

Por su parte, Teodoro Casana volvió a postular, siempre por el Partido Somos Perú. Una tercera lista importante en esta elección fue la del Partido Alianza para el Progreso, cuya candidata

a alcaldesa era Teófila Elvira Gargate Sánchez, quien antes había postulado por el Movimiento Río Santa Caudaloso.

En la elección del tres de octubre de 2010, hubo 2940 electores en el padrón, y 2643 votantes el día de la elección. Los votos válidos fueron 2262.

Quien ganó fue Meléndez Bismarck, con el 31.9% de los votos válidos y, por ello, quedó reelegido. Teodoro Casana volvió a quedar en segundo lugar, con el 28.4%; y, en tercer lugar, la candidata Gargate Sánchez, con el 21.1%. El resto de candidatos, que eran seis, sacaron de 3.7% para abajo (JNE, 2015).

Cabe mencionar que Guzmán Aguirre, el líder del Movimiento Regional Río Santa Caudaloso, perdió su reelección, y quedó en segundo lugar. Y quien ganó la alcaldía provincial de El Santa, en 2010, fue Luis Humberto Arroyo Rojas del Movimiento Regional Cuenta Conmigo. Este movimiento estaba liderado por César Álvarez Aguilar, quien había sido elegido Presidente Regional en 2006 y en 2010 fue reelegido como tal.

No pasó mucho tiempo y nuevamente, en 2012, el alcalde Meléndez Bismarck enfrentó una nueva consulta popular de revocatoria, lo cual ratificaba que la polarización continuaba presente. Esta vez la promotora fue una mujer, Virginia Margarita Estrada Melo.

El documento señalaba como razones supuestas a las siguientes: abuso de autoridad, malversación de fondos, incumplimiento de presupuesto participativo, y obras sobrevaloradas. Las autoridades sometidas a la consulta fueron otra vez el alcalde y los cinco regidores, de los cuales cuatro eran de la lista del alcalde y uno pertenecía a la lista de Casana.

La votación respecto a la Consulta se llevó a cabo el 30 de setiembre de 2012. Hubo 3108 electores en el padrón y 2,577 votantes efectivos. Al revés de la anterior Revocatoria de 2009, esta

vez fueron revocados los cargos de todas las autoridades municipales, el alcalde y los cinco regidores (JNE, 2015).

Como tenía que ser, esto condujo a una nueva elección municipal, la misma que se realizó el 7 de julio de 2013. En el padrón hubo 3195 electores y 2766 votantes efectivos. Esta vez las tres principales listas competidoras en Samanco fueron inscritas por el Movimiento Regional Cuenta Conmigo, cuyo candidato era Rafael Alejandro Huamanchumo Sánchez; por el Partido Somos Perú, cuyo candidato volvió a ser Teodoro Casana; y el Partido Alianza para el Progreso, con Teófila Elvira Gargate Sánchez como candidata.

El día de la elección, el candidato ganador de la Alcaldía y de las cuatro regidurías que le correspondía fue Rafael Huamanchumo Sánchez, de Cuenta Conmigo, con el 36.1% de los votos válidos. Teodoro Casana, de Somos Perú, quedó en segundo lugar con 29.4%; y la señora Gargate Sánchez, de Alianza para el Progreso, quedó en tercer lugar, con el 24.0% de los votos válidos. El resto de candidatos obtuvo alrededor del 6 % o menos de los votos válidos (JNE, 2015).

La alcaldía de Samanco duró un poco menos de un año en manos de Huamanchumo Sánchez, pues en 2014 tuvo que celebrarse una nueva elección municipal, la cual se realizó el 5 de octubre de ese año. Jaime Teodoro Casana Escobedo volvió a presentarse nuevamente por el Partido Somos Perú. Había sido elegido alcalde por última vez en 2003, cuando ganó las elecciones municipales complementarias que se realizaron ese año como resultado de la anulación de la elección municipal distrital de 2002. Luego perdió sucesivamente las elecciones municipales en 2006, 2010 y 2013, quedando las tres veces en un expectante segundo lugar.

De esta manera, desde 1993, en que fue elegido alcalde de Samanco por primera vez, Casana Escobedo había sido un protagonista central de la política en el pequeño distrito de Samanco, representando a una parte del distrito, la parte periférica, dedicada a trabajar la tierra y

fundamentalmente inmigrante. Esta estuvo en permanente tensión con el centro urbano, el lado porteño, pescador y dedicado a trabajar en el mar o la costa. Sus competidores más encarnizados representaban a esta parte de Samanco. La del 2014 era la novena elección consecutiva en la que iba a participar.

El principal competidor de Casana Escobedo en 2014 fue Rafael Alejandro Huamanchumo Sánchez, quien era el alcalde en ejercicio y había sido elegido el 2013 en las elecciones municipales complementarias como candidato del Movimiento Regional Cuenta Conmigo. En 2014, Huamanchumo postuló por el Movimiento Regional Andema. Otros tres competidores de menor peso fueron los que presentaron los partidos Democracia Directa y Alianza para el Progreso y el Movimiento Regional Río Santa Caudaloso.

Tras Once Años, Casana Volvía A La Alcaldía

El día de la elección, en el padrón electoral del distrito figuraban 3,430 electores, de los cuales 3047 fueron votantes efectivos. Al terminar el cómputo de los votos, Casana Escobedo había ganado con el 32.6 % de los votos válidos. En segundo lugar, quedó Huamanchumo Sánchez con el 30.4%. Los candidatos de Democracia Directa y Alianza para el Progreso tuvieron cerca de 10 % de los votos cada uno, y el Movimiento Río Santa Caudaloso obtuvo el 7%. El resto de listas, cuatro en total, sacaron alrededor de 4% o menos (JNE, 2015).

Como resultado de esta elección, la relación de alcalde y cinco regidores que se formaría en el período 2014 a 2018 sería la siguiente: el alcalde sería Teodoro Jaime Casana Escobedo y los cuatro regidores de su lista serían Francisco Ariza Espinoza, primer regidor o teniente alcalde, Fanny Gladys Mallqui Huamán, Jonathan Eder Solís Haro, y Carlos Alberto Bedón Pérez. La única regidora correspondería, como era usual, a la primera minoría de la elección, la Sra. Noemí Katherine Rubina Moreno (JNE, 2015).

De este modo Casana Escobedo ya estaba en la puerta del despacho de alcalde de Samanco que había estado esperando desde 2006 hasta 2014, pero algunos acontecimientos frustraron que esto se consumara. Esto a su vez hizo que volviera a emerger una violencia latente que se había ido acumulando desde 2002, debido a la polarización que nunca se resolvió entre samanqueños del centro urbano y samanqueños de los centros poblados periféricos.

Lo que ocurrió es que antes de las elecciones, el 22 de setiembre de 2014, una sala de la Corte Superior de Justicia de El Santa había emitido sentencia en el juicio que se le seguía desde años atrás a Casana Escobedo por coautor en el delito de colusión desleal.

Se les condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de tres años e inhabilitación en el ejercicio de los cargos que pueda estar ejerciendo y para acceder a cargos públicos por el plazo de tres años. La sentencia fue remitida al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y este a su vez la envió al Jurado Electoral Especial (JEE) de El Santa para que proceda según correspondiera.

Inhabilitación Temporal A Casana

A su vez el mencionado JEE, en cumplimiento del mandato judicial, dispuso el 26 de noviembre de 2011 que no se le entregara la credencial a Casana Escobedo por estar inhábil para desempeñar o acceder a cargo público. Esta resolución fue apelada ante el JNE, pero este rechazó la apelación mediante una Resolución del 5 de diciembre de 2014 que mantuvo firme la inhabilitación de Casana Escobedo y encargó al primer regidor Francisco Ariza Espinoza que se hiciera cargo de conducir la transferencia de cargos y tomara juramento al resto de regidores el cercano 1º de Enero.

Más adelante, el 14 de enero de 2015, emitió otra resolución en esa misma línea pero ampliando el encargo a Ariza Espinoza para que sea alcalde provisional y convocó a otra candidata de Somos Perú, Fanny Marilyn Medina de la Rosa, para que ejerza como regidora transitoria, según las resoluciones 3717-2014-JNE y 008-2015-JNE .

Francisco Ariza Espinoza asumió el encargo del JNE pero el resto de regidores elegidos en la lista de Somos Perú intentaron resistir de diversas formas y reiteradamente la inhabilitación de Casana Escobedo y la asunción del cargo de alcalde provisional de Ariza Espinoza. Allí comenzó un conflicto de varios meses por el control de la municipalidad y de sus recursos, el mismo que duró varios meses. Solo terminó cuando, en un acto sumamente violento, unos sicarios asesinaron al alcalde provisional y a su abogado el 20 de Octubre de 2015.

Francisco Ariza Espinoza era oriundo del distrito de Ponto, en la provincia de Huari, en la sierra de Ancash. Tenía 39 años y vivía en Samanco desde que tuvo 14 años. Al momento de postular a regidor, en la lista de Casana Escobedo, tenía residencia en el centro urbano de Samanco. En su hoja de vida, presentada al momento de inscribir su candidatura, consignaba ocupaciones anteriores en la Defensoría de la Mujer, Niño y Adolescente de la municipalidad de Samanco entre el 2000 y el 2001, y en el hospital regional de Nuevo Chimbote, entre 2001 y 2007.

Su nivel educativo era el de Educación Básica. Refirió haber sido candidato a alcalde de Samanco por el partido Acción Popular, en las elecciones municipales de 2002. No incluyó información sobre su ocupación al momento de postular como regidor en 2014. Tampoco incluyó información sobre propiedades ni ingresos (JNE, 2015).

De los otros regidores de la lista de Casana Escobedo, tres de ellos tenían domicilio real en los centros poblados de Samanco: Fanny Mallqui Huamán y Noemí Katherine Rubina lo tenían en el mismo Centro Poblado que Casana Escobedo (Huambacho La Huaca), y uno de ellos en el caserío Huambacho. Otros, Jhonatan Solís Haro y Fanny Medina de la Rosa, en el centro urbano de Samanco. Esta información resulta relevante pues el apoyo a Casana Escobedo estaba, en lo fundamental, en los centros poblados. Y la oposición a él, en el centro urbano de Samanco (Cipriano, 2017).

Entre enero y febrero de 2015, los regidores leales a Casana Escobedo, además de resistir la formalización de la designación de Ariza Espinoza como alcalde provisional, presentaron e hicieron aprobar una moción de vacancia contra él. Ariza Espinoza tuvo que llegar hasta el Jurado Nacional de Elecciones para que este revoque el acuerdo de vacancia (Cipriano, 2017).

El 27 de febrero, los regidores tomaron una decisión importante respecto a un tema que había sido muy controversial en Samanco. A fines de diciembre, entre el 26 y 29 de diciembre, en los últimos días de la gestión del alcalde saliente, Rafael Huamanchumo, elegido en 2013, la Municipalidad había tomado acuerdos para la suscripción de un contrato de venta de terrenos en la playa Vesique a la empresa Consorcio de Proyectos Inmobiliarios Rodolfo Banchemo SAC para que esta construya allí una urbanización. Respecto a esto, los regidores leales a Casana decidieron dejar sin efecto el contrato y anular los acuerdos 076 y 079-2014 relacionados a ese contrato (Cipriano, 2017).

Entre fines de marzo y abril, el mencionado Consorcio envió cartas al alcalde Ariza Espinoza exigiendo la suscripción del contrato y amenazando llevar el caso a una vía arbitral pues podría terminar solicitando indemnización por daños y perjuicios. El 29 de abril el Concejo Municipal vio las cartas del Consorcio y un informe legal de un asesor legal del alcalde, Henry Aldea Correa. Los regidores no habrían hecho mayores reparos (Cipriano, 2017).

El 15 de mayo se suscribió el contrato para la venta del terreno de Vesique, que tenía 628,162 m², con la firma del alcalde Ariza Espinoza y del representante legal del Consorcio. Cabe precisar que este contrato fue por adjudicación directa. El 28 de agosto se elevó a escritura pública. El Consorcio ya había pagado el impuesto de alcabala y se programó la entrega del terreno para el 15 de setiembre de 2015, pero este no se llevó a cabo por los problemas internos de la

municipalidad (Cipriano, 2017). El caso de la venta de este terreno fue, por lo tanto, otro de los factores de conflicto entre Ariza Espinoza y el grupo de regidores que apoyaba a Casana.

Corte Suprema Y JNE, Inhabilitación Definitiva

Entre julio y setiembre ocurrieron dos hechos adversos para Casana y su grupo. El 7 de Julio, el JNE anuló definitivamente la vacancia de Ariza Espinoza, a través de la resolución 187 – 2015 - JNE. Y el 18 de septiembre el JNE recibió de la Corte Suprema de Justicia la sentencia por la cual se ratificó la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por tres años contra Casana Escobedo por colusión desleal. Eso implicaba una causal de vacancia ineludible.

El 23 de setiembre volvió a encenderse el conflicto en torno a los terrenos de Vesique entre los regidores casanistas y el Alcalde Ariza Espinoza. Ese día, los regidores del grupo de Casana denunciaron penalmente al Alcalde por haber suscrito ese contrato, siendo que había un Acuerdo de Consejo que anuló otros Acuerdos previos que antes dieron luz verde a la suscripción de ese contrato. La denuncia fue presentada en la Fiscalía Mixta del distrito de Nepeña (Cipriano, 2017).

En los días siguientes interpusieron otras denuncias o demandas alegando la irregularidad del Contrato. El 28 de setiembre lo hicieron ante la Superintendencia de Bienes Nacionales. Un día después lo hacen ante la Procuraduría Anticorrupción del Santa. Después ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción, pero esta vez, además de denunciar al alcalde también denunciaron a los funcionarios de su gestión y a los funcionarios de la gestión anterior. El seis de octubre presentaron una carta ante la Superintendencia de Registros Públicos, para alertarla de esta *irregular* venta.

El mismo seis de octubre, todos los regidores del grupo que seguía a Casana fueron citados por la fiscalía de Nepeña para recibir sus declaraciones sobre su denuncia contra el alcalde Ariza Espinoza por usurpación de funciones y abuso de autoridad. Igual citación se hizo al propio

alcalde. La fecha fijada fue 20 de Octubre. Al alcalde le tocaba declarar a las 14:01 horas (Cipriano, 2017).

Asesinato En La Ruta

Ese día, después de declarar ante la fiscalía del distrito de Nepeña, a las 14:31 horas, el alcalde Francisco Ariza Espinoza emprendió el regreso hacia Samanco. Iba en el carro de propiedad de Henry Aldea Correa, bajo cuya asesoría se había suscrito el contrato con el Consorcio interesado en urbanizar la playa de Vesique.

A la altura de un cruce llamado Huacatambo hay un rompemuelles que obligó al conductor, Aldea Correa, a reducir la velocidad. Al hacerlo, aparecieron dos adolescentes de 16 años cada uno. Uno de ellos comienza disparar hacia el interior del automóvil y el otro lanza una bomba molotov, que provoca que se incendie. Luego de herir muy gravemente al alcalde provisional y al abogado, escapan en un automóvil que aguardaba mientras otro, que aparentemente les cubría la retirada, parte también con ellos. Una media hora después, a las 15:00 horas, policías de Nepeña llegaron hasta el cruce de Huacatambo y trasladaron a las víctimas hasta el Hospital Regional de Chimbote. Llegaron ya fallecidos (Cipriano, 2017).

El Requerimiento Acusatorio Del Fiscal

¿Quiénes fueron los autores?, ¿por qué lo hicieron? y ¿cómo se organizó y ejecutó esta acción de violencia tan extrema? Estas preguntas, por supuesto, no corresponde absolverlas, ni opinar sobre eso, a esta tesis. Sin embargo, la información que se recoge en la investigación penal permite inferir aspectos importantes del contexto de la región inmediato a Samanco. Por lo tanto, ayuda a entender cómo estaba expuesto este pequeño distrito a un evento como ese.

En ese sentido, en lo que sigue nos vamos a apoyar en el contenido del requerimiento acusatorio formulado por el fiscal que se encargó del caso, don Edwin Ivan Cipriano Lozano, por

entonces Fiscal Provincial Titular del Primer Despacho de Decisión Temprana de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal del Santa.

Dicho requerimiento acusatorio fue presentado el 9 de mayo de 2017. Haremos mención a distintos datos de ese requerimiento acusatorio para mostrar cómo en el contexto cercano a Samanco estaban disponibles distintos elementos propicios para esa acción violenta. De ninguna manera significa que compartimos, o no compartimos, las conclusiones o valoraciones que de esos datos o hechos hace el requerimiento acusatorio.

Dicho requerimiento acusatorio encuentra que los delitos cometidos son sicariato y asociación ilícita para delinquir. Formula imputaciones de diverso tipo contra quince personas, de acuerdo a su supuesta intervención en esos delitos.

En el delito de sicariato, que se materializa en el asesinato del alcalde y de su abogado, hay un grupo de siete personas a los que se les imputa el primer nivel de participación en el homicidio en calidad de *mandantes o contratantes* de los autores directos del crimen. Ellos habrían decidido el asesinato y aportado dinero para pagar a esos autores directos.

Esos *mandantes* serían, primero, Carlos Humberto Bazán Castro, que había sido funcionario de la municipalidad de Samanco hasta que llegó Francisco Ariza Espinoza y lo sacó del cargo y segundo, Teodoro Casana Escobedo, que ganó las elecciones a la Municipalidad pero que perdió la posibilidad de ser alcalde debido a las sentencias por un delito doloso en primera y en segunda instancia. Este primer grupo de siete lo completaban los cinco regidores de la lista de Casana que luego fueron opositores a Ariza Espinoza (Cipriano, 2017).

Estos siete, en la versión del requerimiento acusatorio del fiscal, tuvieron como móvil para el asesinato el de *apoderarse del dominio de la Municipalidad* sacando del cargo a Ariza Espinoza

mediante su eliminación para la “asunción del cargo de alcalde a su aliada regidora Fanny GMH” (Cipriano, 2017).

Bazán Castro, en esa misma versión, tenía otros móviles propios: la venganza por haber sido removido del cargo de ejecutor de cobranzas coactivas pues el alcalde Ariza Espinoza desapareció su área. Además, él tenía la expectativa de recuperar el dinero con el que habría financiado la campaña electoral de Casana Escobedo, y ello no iba a ser posible si Ariza continuaba como Alcalde (Cipriano, 2017). Bazán Castro, según el Requerimiento Acusatorio, ya había sido financista de candidatos en dos oportunidades anteriores (Cipriano, 2017).

Bazán Castro, el ex funcionario de la municipalidad, habría sido el encargado de contactar al intermediario entre los *mandantes* y los ejecutores directos. A quien escogió es a Marcos Andrés Vásquez Julca, alias Chileno (Cipriano, 2017), que vino a ser el octavo imputado. Este a su vez reclutó y sería el mando inmediato de quienes serían los participantes directos en el acto homicida.

Vásquez Julca era amigo de la época universitaria de Bazán Castro, también lo era su esposa, de la misma época. Ya había tenido pena de cárcel en un penal cercano a Chimbote, y su esposa trabajaba en la Municipalidad. El móvil suyo para participar en el asesinato era el lucro. Ese móvil era el mismo para el caso de los otros 8 ejecutores directos del acto criminal (Cipriano, 2017).

Esos participantes directos habrían sido Ayrton JCC y Luis BMR; Miguel JSC, Luis EMF, Renzo APA, Wilmer WTOM, y los llamados infractores por ser menores de edad, por lo que se mencionan solo sus alias: Cumpita y Shadow. Estos tenían 16 años cada uno y fueron los que interceptaron, dispararon y lanzaron la bomba molotov dentro del auto en que iban las víctimas. Los roles de los demás fueron los siguientes:

- Ayrton JCC fue el encargado de conseguir a los choferes y los carros en el que llegaron los autores materiales del hecho, incluyendo a los que dispararon.
- Luis BMR actuó de campana en la carretera para que alerte en caso de que apareciera algún vehículo policial.
- Miguel JSC, sería quien recibió las armas de Vásquez Julca, y se las llevó a Wilmer WTOM quien se las entregó a los adolescentes que las usarían contra las víctimas.
- Luis EMF, sería uno de los choferes a cargo del auto que trasladó a Vásquez Julca, a Ayrton y a Shadow, uno de los adolescentes.
- Renzo APA, sería el otro chofer, el del otro auto que movilizó a Wilmer WTOM y al otro adolescente Cumpita.
- Wilmer WTOM, habría recibido las armas y entregado a los adolescentes, y también coordinaba la acción con Vásquez Julca.
- Cumpita, habría sido el adolescente encargado de hacer los disparos sobre las dos víctimas.
- Shadow, habría sido el otro, quien aseguró el homicidio lanzando la bomba molotov dentro del auto donde iban las víctimas (Cipriano, 2017, pp. 35- 36).

En el delito de asociación ilícita para delinquir, el requerimiento acusatorio formula imputaciones a ocho personas. Nuevamente a Teodoro Casana Escobedo y a Carlos Humberto Bazán Castro, en calidad de *cabecillas*; al abogado Juan Ciro Bazan Cribillero, en calidad de *brazo legal* o asesor; y otra vez a los cinco regidores leales a Casana Escobedo, encargados de cumplir los designios de la asociación ilícita.

El propósito de esta asociación habría sido el de tomar control de la municipalidad y hacer partícipe de ese control a Bazán Castro, como reciprocidad de haber financiado la campaña. Se

trataba del control de las áreas más importantes en cuanto a la gestión presupuestal, adquisición de bienes y servicios, contratos y nombramientos de personal.

Para alcanzar ese objetivo habrían llegado a un *acuerdo colusorio* entre los cabecillas y los regidores para obstruir la gestión del alcalde provisional Ariza Espinoza, el mismo que se fue cumpliendo mientras Ariza era Alcalde y estaba vivo. El abogado Bazán Cribillero se encargó de todo el sustento legal para esta operación de derribo (Cipriano, 2017).

Asesinado el alcalde, los regidores dieron el paso siguiente inmediato para tomar control de la municipalidad: declarar la vacancia de la alcaldía para que la primera regidora, Fanny Mallqui Huamán asuma como alcaldesa.

El 26 de Octubre, el organismo municipal provincial llamado Comisión Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) se reunió en Chimbote con los regidores samanqueños para solicitarles que antes de ingresar a la municipalidad de Samanco gestionen el nombramiento de la regidora Mallqui como nueva alcaldesa para evitar enfrentamientos con la población del puerto de Samanco.

No obstante, los regidores y su abogado, con protección policial, ingresaron a la municipalidad el día 28, celebraron una reunión de concejo y declararon la vacancia del fallecido Ariza Espinoza. A continuación encargan a la regidora Mallqui la conducción de la municipalidad y hacen el nombramiento de una nueva gerenta municipal. Para el documento Requerimiento Acusatorio este acto “pone de manifiesto la consumación de la idea que originó el asesinato de Francisco Ariza Espinoza, esto es, asumir el control administrativo y económico de la Municipalidad Distrital de Samanco” (Cipriano, 2017).

En las semanas posteriores hubo una cadena de nombramientos de funcionarios, entre ellos el nombramiento, como gerente de planificación y presupuesto de Luz Lisette Perez Kuroda, la

esposa de Marcos Andrés Vásquez Julca, el señalado como el mando operativo de los asesinos de Francisco Ariza Espinoza y de su abogado Henry Aldea. A la misma persona se le nombra también como gerente encargada de tesorería. Cabe señalar que Pérez Kuroda solo estuvo en los cargos mencionados hasta el 3 de diciembre de 2015, cuando renunció, pues el día anterior el Ministerio Público, en una audiencia de convalidación de detención preliminar se refirió a la participación de su esposo en el homicidio mencionado (Cipriano, 2017).

Los Imputados Y Las Penas Pedidas

El 9 de mayo de 2017, como ya se ha dicho, el fiscal que veía el caso presentó su Requerimiento Acusatorio contra 15 personas por los delitos de sicariato y asociación ilícita en agravio de Francisco Ariza Espinoza y Henry Aldea Correa. Entre las personas directamente vinculadas a la municipalidad de Samanco y a las elecciones de 2014 el requerimiento propuso penas que van desde 25 años de cárcel hasta cadena perpetua.

Cadena perpetua se pidió para Carlos Bazán Castro, por su participación como coautor de los delitos de Asociación Ilícita y Sicariato y también como coautor del acto mismo del asesinato. Para Teodoro Casana Escobedo se pidió 25 años de cárcel por coautor de sicariato y asociación ilícita. Para los cinco regidores de la lista que lo acompañaron en las elecciones municipales distritales de 2014, se pidieron 33 años de cárcel por coautores de los mismos delitos.

En relación a los participantes más directamente implicados en la acción misma del homicidio, las penas más graves, de cadena perpetua, se pidieron para Marcos Andrés Vásquez Julca, como coautor del asesinato; Miguel S.C., como cómplice primario; y Ayrton C.C. y Luis M.F., como coautores del *hecho criminoso*.

A los otros tres coautores del asesinato se pidieron entre 23 y 25 años. Y para los dos adolescentes que ejecutaron los disparos que causaron la muerte de las víctimas, por ser menores

de edad, se consideró que se trataba de una infracción y se les aplicó una sanción bastante menor de internamiento en un centro de readaptación.

Para el último participante, en su caso por coautor en el delito de asociación ilícita, Juan Bazán Cribillero, el fiscal a cargo pidió 10 años de cárcel. También se pidieron penas de reparación civil de diferente monto.

Conclusión De Doce Años De Polarización

Así es como, en Samanco, tras un caso de violencia electoral típica ocurrido en 2002, cuyos factores fueron nuevamente analizados y determinados en el segundo capítulo de esta tesis, vino un período de 12 años de procesos electorales en donde la violencia aparentemente había sido erradicada y no ocurrieron nuevos incidentes violentos en ninguno de los seis procesos electorales siguientes, incluyendo el de 2014, en el que Teodoro Casana volvió a ganar.

Sin embargo, subsistió latente el factor que probablemente sea el más de fondo y recurrente en los casos de violencia electoral: una aguda polarización política. Subsistió latente porque los otros factores, la diferenciación y la polarización social, el posicionamiento de los candidatos competidores en una parte del distrito en contra del otro, y la inexistencia de canales de tratamiento de las diferencias no se habían resuelto.

Cuando, después de ganar Casana, las autoridades judiciales y electorales nacionales, determinaron la inhabilitación, temporal primero y después definitiva del ganador de la Alcaldía, esa polarización política se activó y se convirtió en una confrontación extrema, en la cual solo podían haber ganadores y perdedores absolutos. Por eso, el conflicto pasó, de ser encarado en la esfera política, a dirimirse en el espacio de la violencia absoluta: el de la criminalidad.

Sin que esto quiera decir que sean absolutamente ciertos los cargos del requerimiento acusatorio contra Casana y sus regidores, sostenemos que esas son las razones por las que se

termina pasando desde una violencia electoral típica en donde los actores son todos de corte electoral o político a una acción criminal.

En ello incidió esa larga polarización social y debilidad institucional no resuelta a la que nos hemos referido, por una parte. Y por otra, un contexto regional en el que entre 2002 y 2015, la violencia criminal y el sicariato habían crecido e incluso ya habían invadido la arena política regional y provincial en varios casos.

En 2015, de todas las regiones del Perú, Ancash tenía la mayor ocurrencia de casos de sicariato; y de todas las provincias, El Santa, tenía el segundo lugar, siendo superado solo por la provincia de Lima (INEI, 2016, pp. 52 - 53). Por eso, ya eran elementos disponibles para dirimir conflictos en estas arenas.

Así es como algunos actores, que podrían haber sido Casana y sus regidores, como dice el fiscal, u otros, pues aún tendría que culminarse un largo juicio, optaron por recurrir a esos elementos criminales extra y antipolíticos. El proceso electoral de 2014, aparentemente calmo y pacífico, no culminó sino hasta después de setiembre de 2015, cuando una sentencia de la Corte Suprema ratificó la validez de una pena de prisión por delito doloso a Casana, lo cual implicaba inevitablemente que el JNE tuviera que retirarle definitivamente de su condición de alcalde electo. Eso significaba que Ariza Espinoza se quedaba como alcalde. De esa fecha solo pasaron algunas semanas y se produjo aquel hecho de sangre traumático para Samanco. En el caso de Casana, el principal protagonista de los procesos electorales municipales del distrito en los 22 años previos a 2014, terminó acusado como coautor por ese hecho y fugado al momento que se entregó el Requerimiento Fiscal en mayo de 2017.

Segunda Parte: Conclusiones Generales

En la primera parte de esta tesis nos hemos referido a lo que entendemos por violencia y por violencia electoral. Igualmente hicimos una categorización de los distintos tipos de violencia electoral, señalando a la violencia electoral organizada con dos subcategorías, pro sistémica y anti sistémica– y a la violencia electoral reactiva. La primera estaría asociada a un cierto nivel de organización y claridad de objetivos políticos establecidos previamente a los hechos de violencia. La segunda, a una cierta espontaneidad y a una finalidad más bien expresiva.

Tres Casos De Violencia Electoral Reactiva

Los casos estudiados en esta tesis, ocurridos en la provincia de Santa Cruz y en el distrito de Los Baños del Inca, de la Región Cajamarca, y en el distrito de Samanco, provincia de El Santa, Región Ancash, configuraron casos de violencia electoral reactiva, que tuvo como finalidad la de expresar una protesta y un rechazo circunstancial de los resultados de las elecciones. Pero no hubo una preparación ni una organización preconcebidas de los hechos violentos. Tampoco se detectaron actitudes ni discursos anti sistémicos.

Tales hechos de violencia electoral reactiva ocurrieron como resultado de una combinación de factores y circunstancias que pueden sintetizarse de la siguiente manera.

En los tres casos, estamos ante una provincia y dos distritos que tienen una integración a la economía regional o nacional que resulta marginal, poco satisfactoria y eventualmente frustrante para gran parte de sus habitantes. Una parte muy importante de estas poblaciones vive en condiciones de marcada pobreza, que se ilustra en diversos indicadores sociales.

Aun así, los efectos de esa integración marginal no son iguales para sus ámbitos urbanos y rurales. En los tres casos se desarrolla una diferenciación y una polaridad entre el ámbito urbano y el ámbito rural, la cual es determinada ya sea por la desigualdad del nivel de vida, las diferencias en las

actividades de uno y otro ámbito, o el desigual impacto de algunos cambios económicos en el entorno o, también, por algunos aspectos subjetivos como el celo respecto a qué parte del distrito le corresponde el *derecho* a gobernar.

En la dimensión política, la información recogida muestra que en las tres circunscripciones aparece un fuerte aumento del electorado junto a un escaso desarrollo de instituciones políticas locales, y en particular una presencia muy débil de partidos o corrientes políticas que podrían canalizar la diferenciación local hacia puntos de interés común. En los tres casos, los partidos políticos tuvieron poca presencia, y con votaciones muy reducidas en los procesos electorales municipales inmediatamente anteriores.

En lugar de los partidos o corrientes políticas, la diferenciación local es canalizada, en los tres casos, por líderes locales que privilegian una relación personal con una parte del distrito. En este caso, con los ámbitos rurales, normalmente más pobres. Para ello recurren, según referencias verosímiles, a prácticas clientelistas con dichas poblaciones.

De este modo la disputa política local no aparece como una competencia entre corrientes que compiten por representar el interés común, sino como una competencia entre facciones del distrito. Lo cual transforma la diferenciación social en polarización social y política.

Los municipios locales y sus recursos, en medio de esta polarización, dejan de aparecer como espacios para una política de interés común, y es vista como la presa a ser ganada por una de las partes o polos del distrito a través de la victoria de sus respectivos líderes y la derrota del resto. Una suerte de juego de suma cero, en la que unos ganan todo y otros pierden todo.

La polarización a la que hacemos mención se agudiza por circunstancias más inmediatas, tales como la postulación a la reelección de los alcaldes en ejercicio, la existencia de dispositivos legales que no garantizan que la competencia electoral se desarrolle de manera limpia, la posibilidad de

aprovechamiento de recursos públicos en las campañas electorales municipales, y la posibilidad del traslado de electores con el fin de contar con votos de no residentes —el llamado caso de los *golondrinos*.

Estas prácticas, o la percepción de su existencia, introducen un clima de desconfianza en la fidelidad de los resultados electorales, desconfianza que, por desconocimiento del marco legal existente, termina afectando a los propios organismos electorales a los que se corresponsabiliza por la supuesta inacción frente a dichas prácticas.

Los hechos se desencadenan cuando, primero, por informaciones no oficiales, los opositores toman conocimiento del triunfo de los candidatos reeleccionistas que no son los preferidos por la mayoría del electorado de los ámbitos urbanos. Segundo, los locales de votación o las sedes de los organismos electorales no cuentan con la suficiente protección de fuerzas policiales o militares que siempre son necesarias como elementos disuasivos precisamente ante eventuales reacciones de descontento.

Por lo tanto, la probabilidad de que un proceso electoral local degenera en hechos de violencia estaría determinada por la coincidencia de los factores siguientes:

- La existencia de una significativa proporción de la población en condiciones de pobreza o desempleo.
- Un proceso de diferenciación social al interior de la localidad.
- Un escaso o nulo desarrollo de instituciones políticas locales.
- La existencia de liderazgos personales que privilegian una relación clientelista con una parte de la población, en particular con la parte pobre. La polarización de la competencia política entre dichos liderazgos y sus opositores.

- Esta probabilidad aumenta cuando el marco legal permite la postulación a la reelección sin proveer las garantías para una competencia limpia y por lo tanto dando lugar a un clima de desconfianza.
- Y la violencia se desencadena si la información y/o desinformación sobre el proceso y sobre los resultados electorales no logran revertir la desconfianza sino por el contrario potencian el descontento.
- No existe la fuerza de seguridad pública en un nivel que disuada a los actores de la violencia.

¿Qué Hacer Para Prevenir La Violencia Electoral?

Acciones De Corto Plazo Y Modificaciones Legales

En primer lugar, es necesario actuar sobre aspectos de corto plazo, en los cuales las acciones pueden tener resultados más inmediatos, entre ellos el marco legal y ciertas políticas que pueden adoptar los organismos encargados de los procesos electorales.

Una de las reglas que se burlan con cierta frecuencia es la de no usar los recursos públicos para las campañas particulares de algunos de los candidatos, caso que se da especialmente cuando una autoridad en ejercicio postula a la reelección. Esto forma parte de la tradición política latinoamericana y está caracterizado como patrimonialismo y clientelismo.

El potencial de violencia aumenta si el marco legal no provee ciertas reglas que garanticen ciertos niveles de juego limpio en la competencia electoral o que reduzcan significativamente las posibilidades de juego sucio tales como el patrimonialismo o el clientelismo con recursos públicos.

En los casos que hemos estudiado se ha visto precisamente que el marco legal existente dejaba las puertas abiertas para este tipo de juego sucio pues, por un lado, permitía la postulación a la reelección inmediata de un alcalde en ejercicio, y a la vez dejaba que siga desempeñándose como alcalde mientras era candidato en campaña a lo largo de todo el proceso electoral.

Finalmente era altamente permisiva para el caso en que utilice los recursos del municipio durante su campaña. Este tipo de normativa debía ser modificada pues no hacía más que aumentar el potencial de polarización y de violencia en los procesos electorales municipales.

De hecho, de las 38 circunscripciones que reportaron incidentes efectivos de violencia en noviembre del 2002, en 24 de ellas hubo alcaldes que estaban compitiendo por la reelección (Reyna 2003, p.67). De esas 24, 15 lograron efectivamente la reelección y 9 fracasaron. Esto no quiere decir que todos hayan recurrido al clientelismo, pero muestra la significativa presencia del tema de la reelección en casi los dos tercios de las circunscripciones en que hubo violencia.

Por ello, se hacía necesario establecer la obligación de que los alcaldes en ejercicio que postulen a su reelección pidan licencia efectiva con significativa anticipación a la fecha de las elecciones y que el uso de los recursos públicos en favor de las campañas de los candidatos, tengan a la primera vez que ocurran, sanciones verdaderamente disuasivas y oportunas en el plano electoral, además de las sanciones del caso en las vías administrativas, civiles o penales.

Recién trece años después de las elecciones de 2002, en marzo de 2015, se optó por una medida más radical respecto a los alcaldes reeleccionistas: mediante la Ley 30305, modificatoria del artículo 194 de la Constitución Política del Perú, se estableció la prohibición de la reelección inmediata de los alcaldes.

Sin embargo, siguen existiendo las permisividades señaladas en la ley de elecciones municipales y en su modificatoria. Ocurre respecto a los regidores que postulen a su reelección como tales, o a su elección como alcaldes, y respecto a los funcionarios municipales que postulen a alcaldes o regidores. Los regidores no deben pedir licencia, y los funcionarios municipales solo deben hacerlo para los últimos 30 días naturales.

Por otro lado, siguen existiendo regulaciones demasiado indulgentes, de hecho, permisivas, para los casos en que usen recursos de la municipalidad en provecho de sus campañas.

Otro de los temas conflictivos en los casos estudiados en esta tesis ha sido el de la presunción sobre la presencia de electores trashumantes, también llamados *golondrinos*, en las elecciones locales, lo cual contribuía a polarizar la competencia. Se trata del traslado de electores de una circunscripción a otra en la que no residen, a fin de incidir en los resultados electorales.

Esta mala práctica tendría más incidencia en las circunscripciones con electorados pequeños que en las circunscripciones medianas o grandes. Una comparación del crecimiento del número de electores entre las elecciones generales del 2001 y las municipales del 2002 muestra, en algunos de los lugares estudiados, unos incrementos muy marcados.

Hasta años recientes era poco lo que hacían los organismos electorales para prevenir esta práctica y sus consecuencias en la turbiedad y conflictividad de un proceso electoral local. Sin embargo, desde el 2013, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), que es el organismo electoral encargado de confeccionar el padrón inicial de electores y cumplir con las observaciones que le hagan el JNE u otros organismos, decidió medidas para fortalecer su papel en el aspecto de la verificación de la autenticidad de la dirección domiciliaria. Posteriormente se han dado algunas nuevas leyes que ayudan a una mejor verificación de esa autenticidad.

Cabe subrayar que un inadecuado marco legal electoral puede tener otro efecto muy dañino, más allá de la degradación de la competencia electoral. Y es el de afectar la credibilidad y la legitimidad de los organismos electorales pues a ellos se les termina atribuyendo los defectos de la legislación. Su propia imagen de neutralidad queda en cuestión, atribuyéndoseles el estar parcializados con alguno de los competidores. Esto puede tener el mismo efecto desencadenante de violencia que cuando, en una competencia deportiva, el árbitro aparece como favorecedor de uno de los competidores.

Hay otros aspectos de intervención que sí se ubican precisamente dentro de la esfera de la gestión de los organismos electorales. Uno de ellos es el de la circulación de información, no cierta ni oficial, respecto a los resultados de las votaciones antes de que concluyan los escrutinios totales. Podrían ser prácticas intencionadas de desinformación con el fin de malograr un proceso que se sabe serán adversos para los instigadores. Pero también es un tema sobre el cual una eficaz y oportuna acción de información por parte de los organismos electorales encargados de los aspectos organizativos (ONPE) y de justicia electoral (JNE) podría funcionar como elemento de distensión.

Esta tarea informativa es particularmente necesaria en los días previos al día de las elecciones. Y debe puntualizar que solo la información proveniente de los organismos electorales debe ser considerada creíble.

El otro desencadenante de incidentes violentos es la ausencia de una adecuada protección de parte de las fuerzas del orden, lo cual sugiere que, en determinadas ocasiones y lugares, el número o la permanencia de estos efectivos debería incrementarse allí donde los funcionarios electorales observen indicios de una polarización de las campañas.

Estudios al respecto demuestran que la probabilidad de violencia aumenta allí donde se percibe una alta probabilidad de impunidad, y esto es lo que aparece precisamente cuando un local electoral está desprotegido frente a un grupo de airados descontentos por los resultados. Los organismos electorales debieran estar atentos con este tipo de previsiones.

Igualmente, los organismos y funcionarios electorales deberían incorporar en sus planes determinadas acciones de prevención y conciliación de conflictos. Algunas de ellas para cortar la credibilidad de las versiones no oficiales y para asegurar una temprana difusión de resultados el día mismo de la votación. Igualmente, ciertas acciones para garantizar la necesaria protección de las fuerzas del orden.

De hecho los organismos electorales peruanos lo han venido haciendo en las elecciones municipales posteriores al 2002. Ya en las elecciones complementarias del 7 de julio del 2003, en varios de los distritos involucrados se realizaron foros de diálogo para prevenir hechos de violencia que ayudaron a distender las tensiones. El conflicto preexistente no había desaparecido del todo pero las elecciones culminaron bien.

Sobre El Marco Social E Institucional

Es cierto que la pobreza por sí sola no conduce a la violencia electoral. En general, diversos estudios sobre los determinantes de la violencia muestran que no hay una relación directa entre pobreza y violencia.

Sin embargo si la pobreza coincide con 1) cambios o procesos que provoquen diferenciación social y desigualdad en las poblaciones, por un lado, y 2) con un desarrollo muy escaso, o con un deterioro- de las instituciones políticas locales, por otro lado, entonces la pobreza puede llegar a ser altamente funcional a liderazgos clientelistas y faccionalistas que no encaran las diferencias con una perspectiva de interés común sino con una perspectiva altamente sesgada hacia uno de los intereses competidores. Ello lleva a polarizar las relaciones políticas locales y a polarizar los procesos electorales.

Por esta razón, si bien no puede afirmarse la existencia de una relación determinante, inmediata y directa entre pobreza y violencia electoral. Sin embargo, si existiría una relación condicional, mediata e indirecta, que se activa cuando ocurren procesos de diferenciación social –aparecen nuevos grupos o los que existían se diferencian mucho más– y cuando no existen espacios institucionales locales para dialogar los conflictos o tienen una presencia muy precaria.

Si es acompañada por estas condiciones la pobreza puede proveer de adherentes a los liderazgos faccionales, los cuales pueden prosperar con prácticas clientelistas y patrimonialistas antes y durante de los procesos electorales.

Por lo tanto, una idea que debería descartarse es que la violencia electoral sea del todo indiferente o independiente de la pobreza en una población. Por tanto, para prevenir duraderamente tal tipo de situaciones de violencia electoral, sería insuficiente el introducir reformas o prevenciones institucionales si es que hay una alta proporción de la población viviendo en situaciones de pobreza. Una disminución consistente y duradera de la posibilidad de violencia electoral requeriría de una disminución similar de la pobreza.

Lo mismo se puede decir de las diferenciaciones sociales que pueden producirse dentro de la población de las circunscripciones electorales. Tales diferenciaciones, en los casos que hemos visto, se desarrollan asumiendo características de desigualdad entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Por si mismas pueden no ser causas directas e inmediatas de violencia electoral. Pero, en las circunstancias de un bajo nivel de desarrollo de las instituciones políticas, si puede, al igual que la pobreza, generar y sostener aquel tipo de liderazgos polarizantes señalados líneas arriba. Por tanto, la pobreza y la desigualdad también debiera ser reducida significativamente si es que se quiere prevenir a la violencia electoral de manera duradera.

El impacto negativo que tienen los altos niveles de pobreza y de diferenciación o desigualdad social sobre un buen régimen político es un tema de antigua presencia en el pensamiento político, pero estudios de hace más de una década insisten en este tema.

La importancia de actuar sobre los contextos para reducir la pobreza y la marginalización ha sido destacada en prácticamente todos los estudios importantes sobre los problemas de la democratización. Solo así se puede abrir paso a la formación de más ciudadanos, es decir electores autónomos. No actuar sobre esos contextos, es en palabras de Touraine (1998), dejar que se amplíe la distancia entre “el universo de la palabra y el universo de la sangre, entre el mundo de los que están adentro de los que están afuera” (Touraine, 1998, p. 746).

En ese sentido, se hace necesario que las capas de los electorados pobres y rurales sean menos vulnerables y disponibles para las prácticas clientelistas. Para ello se requieren ciertos tipos de economías regionales o locales que, al disminuir la pobreza de manera consistente, liberen las prácticas ciudadanas antes controladas por los caudillos locales y mejoren la integración de ese electorado a la comunidad regional y local.

La más perfecta legislación electoral, la más estricta vigilancia institucional, o los más eficientes y justos organismos electorales, poco podrían lograr si enfrentan un contexto de amplias capas de electores en extrema pobreza y en exclusión, no sólo rurales, las cuales se convierten en mercado para las prácticas faccionales clientelistas y para la competencia electoral no limpia.

Pero además de los factores sociales o estructurales, hemos visto que la posibilidad de violencia electoral crece si junto con la pobreza y la diferenciación social hay un débil o nulo desarrollo de instituciones políticas y, en particular, de partidos.

Dichas instituciones políticas o partidos son las que precisamente, a través de espacios de deliberación, canalizan las diferencias sociales y los intereses parciales y, sin suprimirlos, establecen un acuerdo básico entre las partes, el cual está asociado a ciertos puntos que encarnan el interés común. Parte importante del acuerdo básico tiene que ver con las reglas que rigen la deliberación y la toma de decisiones.

Para que estas sean verdaderas instituciones políticas y partidos políticos, sus líderes y miembros deben tener al menos una relativa autonomía respecto a los intereses particulares –sean estos de naturaleza económica o de otro tipo-. Esto no significa la desaparición de la competencia, de las campañas o de las opciones sociales preferenciales, sino que todas ellas se desarrollan sin dejar de tener como referente, más o menos gravitante, el interés común o general.

Como han señalado Giovanni Sartori para el caso europeo y otros autores como Marcelo Cavarozzi y Esperanza Cassullo para el caso latinoamericano, el proceso de formación de una esfera política y de partidos políticos no se realiza en plazos cortos. Implica una serie de desarrollos previos en la estructura social, en las instituciones, y en la cultura política.

Desde otra perspectiva, incluso un conservador como Huntington también alude a plazos que no son cortos para que ocurra la institucionalización de una comunidad política y de los partidos. Por una serie de razones, entre las cuales destaca la antigua brevedad y escasez de nuestros períodos democráticos, en el Perú no solían existir condiciones favorables para la consolidación de instituciones políticas.

En ausencia de estas instituciones, partidos, reglas, acuerdos básicos o intereses comunes prevalecientes, la competencia local se desarrolla como una disputa entre líderes o jefes muy asociados a intereses particulares. Es decir, una campaña entre facciones, una especie de guerra incruenta por los votos, en medio de la cual las reglas se infringen o se burlan, provocando una creciente polarización que roza con la violencia.

Menor pobreza, menor desigualdad, más institucionalidad política, y dentro de ella, de manera especial, el desarrollo de verdaderos partidos políticos democráticos, serían los principales elementos de un entorno social e institucional menos vulnerable a eventos de violencia electoral local.

Un Caso De Violencia Extrema

Finalmente, lo ocurrido en el distrito de Samanco entre los años 2003 y 2014, que analizamos en el tercer capítulo, muestra los extremos a los que se puede llegar cuando los factores sociales, institucionales o de contexto que inciden en el desencadenamiento de la violencia electoral. La presencia de una mayor dotación de efectivos policiales o un mejor manejo de la información o la mejor gestión

de los organismos electorales pueden llevar a un final pacífico de uno o más procesos electorales sucesivos en una circunscripción electoral.

Sin embargo, si la diferenciación y la polarización social subsisten, y la debilidad de las instituciones políticas locales las incapacita para manejar o resolver esas diferencias y alienta el desarrollo de liderazgos personalistas que refuerzan la polarización, entonces puede continuar la polarización política y convertirse en confrontación abierta y derivar en violencia aún fuera de un proceso electoral ya concluido.

Si además en el entorno del distrito existen otros fenómenos recurrentes de violencia no política sino delincriminal, que son resultado, a su vez, de procesos similares de diferenciaciones sociales y precariedades institucionales más amplias, lo que termina ocurriendo es que los agentes de uno y otro tipo de violencia se asocian y terminan ocurriendo a acciones en donde el sicariato es usado como medio para resolver las diferenciaciones y polarizaciones políticas y electorales.

Este último tipo de casos es un caso extremo y ya degenerado de violencia. Extremo porque se sitúa en la frontera de la violencia política y electoral, y degenerado porque ya no es, en rigor, un caso de estas. Los actores políticos, si se articulan con sicarios, como aparentemente fue este caso, han roto con la política y pasado a ser delincuentes comunes. Y en este caso, al llegarse a estos extremos, la política local quedará hondamente afectada.

Por estas razones, consideramos que las recomendaciones que se hacen en esta Tesis, conservan vigencia, aun cuando varias fallas institucionales hayan sido enmendadas mediante mejoras legislativas, como la indulgencia ante la corrupción de los alcaldes reeleccionistas, una mejor gestión del padrón electoral, o mediante mejoras de gestión, como el mejor manejo de la información electoral o de la seguridad del proceso. El problema es que otros factores sociales e institucionales más de fondo, como los ya mencionados, continúan intocados.

Referencias

Arendt, H. (2006). *Sobre la violencia*. Madrid, España: Alianza Editorial.

Cavarozzi, M. y Castillo, E. (2003). *¿Los partidos políticos en la América Latina hoy: ¿Consolidación o crisis?* En M. Cavarozzi, & J. Aval (Eds.). *El asedio a la política, los partidos políticos latinoamericanos en la era neoliberal*. Buenos Aires, Argentina: Homo Sapiens – Konrad Adenauer

Cipriano, E. (2017) *Requerimiento Acusatorio Caso Fiscal 455 – 2015 ante Juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa*. Chimbote.

- Fajnzylber, P., Lederman, D. y Loayza, N. (1998). *Determinants of crime rates in Latin America and the world: an empirical assessment*. Washington, D.C., USA: World Bank Latin American and Caribbean Studies
- Fleury, S. (2003). *Democracia, poder local y ciudadanía en Brasil*. Fundación CIDOB.
http://app.ebape.fgv.br/comum/arq/pp/peep/cap_liv/democracia_poderlocal.pdf
- Goodwin–Gill, G. (1994). *Elecciones libres y justas, derecho internacional y práctica*. Ginebra, Suiza.: Unión Interparlamentaria.
- Huntington, S. (1972). *El Orden Político en las sociedades en cambio*. Barcelona, España: Paidós.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) Homicidios en el Perú. Contándolos uno a uno. Informe Estadístico No.4, Lima, 2016.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2003). *Banco de Información Distrital. Información cartográfica y estadística del Perú. Estimaciones para el 2001*.
www.inei.gob.pe
- Jurado Nacional de Elecciones. (s.f.) Elecciones Municipales Complementarias del 2003.
https://infogob.jne.gob.pe/Eleccion/FichaEleccion/elecciones-municipales-complementarias-2003-municipal-distrital_candidatos-y-resultados_d5TfljN8zos=Tj
- Jurado Nacional de Elecciones. (s.f.) *Elecciones Municipales Distritales de Samanco de 1993*.
<https://infogob.jne.gob.pe/>
- Jurado Nacional de Elecciones. (s.f.) Procesos electorales de Samanco.
https://infogob.jne.gob.pe/localidad/peru/ancash/santa/samanco_procesos-electorales_IYhLvHkSst6sV
- Jurado Nacional de Elecciones. (s.f.) Revocatoria del mandato de autoridades municipales 2009.

https://infogob.jne.gob.pe/Eleccion/FichaEleccion/consulta-popular-de-revocatoria-del-mandato-de-autoridades-municipales-2009-revocatoria-distrital_resultados_O2tNC58hPkM=t5

Michaud, Y. (2004). *Violencia y ultra violencia en los conflictos comunitarios*. Lima, Perú: IFEA- IEP.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. (2000). *Mapa de Pobreza del Perú*. Lima, Perú:

FONCODES

Mucke, U. (2004). Elecciones y participación política en el Perú del Siglo XIX: la campaña presidencial de 1871 – 72. *Investigaciones Sociales Revista del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, Año VIII*, (número 12), pp. 133 – 166.

Oficina Nacional de Procesos Electorales. (2016). *La violencia electoral en el ámbito local. análisis de escenarios durante las Elecciones Regionales y Municipales 2014*. Lima, Perú: ONPE – Institucional.

Oficina Nacional de Procesos Electorales. (2003). *Elecciones regionales y Municipales 2002 y municipales complementarias 2003. Informe de resultados*. Lima, Perú: Centro de Investigación electoral ONPE. Lima, 2003.

Oficina Nacional de Procesos Electorales. (2010). *Conflictos electorales en el ámbito local. Estudio de las acciones violentas y elaboración de un mapa nacional*. Lima, Perú: ONPE – Institucional.

Oficina Nacional de Procesos Electorales. (2013). *Conflictos y violencia electoral en el ámbito subnacional. Análisis de los hechos registrados en los procesos electorales de 2010 y 2011*. Lima, Perú: ONPE- Institucional.

Organización Panamericana De La Salud. (2002). *Informe Mundial Sobre la violencia y la salud: resumen*. Washington, D.C.: OPS

Paniagua, V. (2003). El derecho de sufragio en el Perú. *Revista Elecciones*, Año 2 (número 2), pp. 61 – 89.

Reyna Izaguirre, C. (1era Ed.). (2003). *Las malas artes. Violencia en elecciones locales*. Centro de Investigación Electoral - Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Reyna, C. (1999). *La inseguridad en el Perú, índices e interpretaciones para los 90*. Lima, Perú: DESCO

Reyna, C. Monsalve, M. Casalino, C., Parodi, D. (2004). *Los procesos electorales 1989 – 1995, problemas y lecciones*. Cuadernos de Trabajo. Centro de Investigación Electoral. Oficina Nacional de Procesos Electorales, Lima.

Sartori, G. (2003). *Partidos y Sistemas de Partidos*. Madrid, España: Alianza Editorial.

Sen, A. (29 agosto de 2000). *Las distintas caras de la pobreza*. Diario El País.

https://elpais.com/diario/2000/08/30/revistaverano/967586417_850215.html

Touraine, A. (1988). Éxitos y límites de la democratización en América Latina. *Estudios Sociológicos del Colegio de México*, Vol. XVI (número 48), pp. 1-16.

Touraine, A. (1988). *La Parole et le sang: Politique et société en Amérique latine*. París, Francia: Editions Odile Jaciob.

Touraine, A. (2000). *¿Qué es la democracia?* (5ta. Ed.). Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Tablas

número	departamento	provincia	distrito	condición de pobreza	incidente
1	Amazonas	Bagua	Aramango	Sin datos	Simpatizantes del partido aprista apedrearon la movilidad que realizaba el repliegue del material electoral, rompiendo los vidrios del auto lo que obligó retornar al local de votación. El personal y el material electoral pudo salir con ayuda de la PNP a las 5:30 AM
2	Ancash	Santa	Samanco	Regular	Simpatizantes de Perú Posible y del Partido Aprista Peruano, irrumpieron en el local de votación, que contaba con la presencia de 04 efectivos policiales, al conocer que el actual alcalde posiblemente saldría reelegido. Destruyeron los vidrios del local de votación y se apoderaron del material electoral para después destruirlo (14 mesas).
3	Ancash	Santa	Moro	Pobre	Simpatizantes de las organizaciones políticas Perú Posible y Partido Aprista Peruano, apedrearon y tomaron el local de votación, impidiendo la salida del personal de la ODPE quienes lograron llegar a su local en horas de la madrugada (04:00 am). Se constató que de las 29 mesas instaladas solo 19 contaban con material electoral. Al final, se recuperó material de 21 mesas (actas completas) y juegos incompletos de las restantes
4	Cajamarca	Cutervo	Santo Domingo de la Capilla	Extrema Pobreza	800 personas encabezados por los candidatos de Acción Popular (Segundo Exaltación Carranza), Freinca (Reinero Flores), Perú Posible (Claudio Cubas Tenorio), y de Integración Cutervina (Grimanesco Chupoma Altamirano), aduciendo la participación de electores migrantes que habrían favorecido al actual alcalde, ingresaron al local de votación. Agredieron al personal de la ODPE y los miembros de mesa, destruyeron e incineraron la totalidad del material electoral

5	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca	Pobre	Simpatizantes de las organizaciones políticas, al conocer la posible reelección del hasta entonces actual alcalde incursionaron en los locales de votación destruyendo las instalaciones y el material electoral de 70 mesas
6	Cajamarca	Cajamarca	Llacanora y Namora	Pobre	Un grupo de personas ingresó al local de votación al conocer los resultados a boca de urna que daban como ganador candidato de Celendin. Destrozaron la totalidad del material electoral municipal. En el distrito de Llacanora la organización política "Fuerza Democrática" presentó el total de actas del distrito. En el distrito de Baños Del Inca se presentó copias legalizadas de 34 actas electorales de un total de 75. En el distrito de Namora no se tiene ninguna acta electoral
7	Cajamarca	Celendín	Miguel Iglesias	Extrema pobreza	Simpatizantes de las diversas organizaciones políticas, encabezados por Nicolás Hoyos Saucedo, Roberto Oyarce Palma, Diomedes Manosalva Vásquez, Éver Vásquez Guevara; incursionaron en el local de votación y amenazaron al personal de la ODPE. Se rompieron vidrios y sustrajeron las ánforas electorales
8	Cajamarca	Celendín	Sorochuco	Muy pobre	Un grupo de personas pertenecientes a las organizaciones políticas Primero Perú, APRA, Acción Popular, Reconstrucción Democrática; liderados por la profesora Dolores Arévalo Ortiz; tomaron el local de votación, llevándose el material electoral. Se recuperó 10 actas.

9	Cajamarca	San Pablo	San Bernardino	Pobre	Un grupo de personas pertenecientes a las organizaciones políticas Primero Perú, APRA, Acción Popular, Reconstrucción Democrática; liderados por la profesora Dolores Arévalo Ortiz; tomaron el local de votación, llevándose el material electoral. Se recuperó 10 actas
10	Cajamarca	San Pablo	Eduardo Villanueva	Muy Pobre	Genaro Meléndez Gonzáles, candidato por el Movimiento Integrador San Marcos, y James Joel Camacho miembro de la organización política Fuerza Sanmarquina; encabezaron una turba que ingreso al local de votación, destrozando material electoral (09 mesas). Como resultado de este hecho, dos efectivos policiales quedaron heridos. Se logró rescatar dos actas
11	Cajamarca	Chota	Pion	Extrema Pobreza	Un grupo de personas simpatizantes del FIM y Perú Posible, liderados por el teniente gobernador Álvaro Rimachin, se ubicaron en las afueras del local de votación e impidieron que el coordinador distrital y local, así como fiscalizadores del JEE, puedan salir del mismo.
12	Cajamarca	Santa Cruz	Santa Cruz	Pobre	Se identificó a Franco Cotrina (APRA), Violeta Sánchez Santa Cruz, Marco Ramos Zuloeta, Armando Flores Becerra ("Santa Cruz A La Actualidad"), Oldemar Izquierdo Hernández y Carlos Arce Becerra como cabecillas de sectores de la población descontentos por la presencia, según ellos, de electores migratorios que habrían determinado el triunfo del actual alcalde. Tomaron la ODPE destrozando y quemando todo el material electoral y el centro de cómputo. También se reportó la agresión física al coordinador logístico, Domingo Masías

13	Huánuco	Yarowilca	Chavinillo	Muy Pobre	Aproximadamente a las 11 p.m., un grupo de 50 personas, incursionó violentamente en el local de la ODPE, ocasionando destrozos en las instalaciones, así como a material electoral, mientras que un grupo de entre 300 personas seguía las actas
14	Ica	Pisco	San Clemente	Pobre	Pobladores encabezados por la esposa del candidato perdedor ingresaron violentamente al local de votación destruyendo el mobiliario y el material electoral de 16 mesas
15	Ica	Pisco	Humay	Pobre	Pobladores descontentos por supuestos votos migrantes ingresaron al local de votación. Rompieron puertas y ventanas e incineraron el material electoral. Ante la escasa seguridad el personal tuvo que evacuar el local. Se logró recuperar 127 actas deterioradas
16	Ica	Ica	Salas	Regular	Pobladores y simpatizantes de diferentes organizaciones ingresaron al local de votación agrediendo al personal de la ODPE, sustrayéndoles dinero y ropa. Luego procedieron a incinerar el material electoral. Se logró salvar 21 actas regionales

17	Ica	Nazca	Changuillo	Pobre	Las organizaciones políticas al enterarse de la reelección por cuarta vez del actual alcalde, derrumbaron una pared del local de votación al momento de tomarlo. La policía utilizó bombas lacrimógenas y logró dispersar a los manifestantes
18	Junín	Chanchamayo	Vítoc	Pobre	Simpatizantes de Acción Popular ingresaron al local de votación llevándose el material electoral (10 mesas), vestuario de miembros de mesa. Además, agredieron al coordinador de local.
19	La Libertad	Pataz	Parcoy	Muy Pobre	Militantes del Partido Aprista encabezados por el candidato a alcalde, Jorge Juárez, ingresaron al local de votación destruyendo el material electoral y agredieron al personal de la ODPE.
20	La Libertad	Trujillo	Simbal	Regular	Alrededor de 300 simpatizantes de las organizaciones Contigo Trujillo, Movimiento Nueva Izquierda y Fuerza Democrática, disconformes con los resultados a boca de urna, tomaron el local de votación, destruyendo e incinerando la totalidad del material electoral

21	La Libertad	Sánchez Carrión	Cochorco	Extrema Pobreza	Alrededor de 300 simpatizantes de las organizaciones Contigo Trujillo, Movimiento Nueva Izquierda y Fuerza Democrática, disconformes con los resultados a boca de urna, tomaron el local de votación, destruyendo e incinerando la totalidad del material electoral
22	La Libertad	Trujillo	Trujillo	Regular	Simpatizantes de las organizaciones políticas Somos Perú y Fuerza Democrática atacaron el frontis de la ODPE
23	Lima	Huaral	Huari	Pobre	Debido a supuesta presencia de electores migrantes que iban a dar triunfo a la reelección del alcalde, pobladores del distrito derribaron una pared del local de votación. Los efectivos policiales realizaron disparos disuasivos. Posteriormente los mismos pobladores bloquearon la calle para impedir repliegue. No se pudo realizar el escrutinio de dos mesas
24	Lima	Huaral	27 de noviembre	Regular	Personeros de Acción Popular y simpatizantes del "Movimiento Democrático Huaralino": Wenceslao Santos Parrasca, Eugenio Conversion Vilca, Adilson Ortiz Jurado, Paulino Francisco Falcón, Melvin Padilla Degollar, Godofredo Vargas Francisco, Laureano Cueva Marcos, Edith Félix Marcos y Villes Paulino Atanasio Casimiro; conjuntamente con un grupo de aproximadamente 80 personas, ingresaron violentamente hasta el centro de acopio donde se apoderaron de todo el material y luego lo incineraron (03 mesas).

25	Loreto	Maynas	Fernando Lores	Sin datos	Simpatizantes de organizaciones políticas perdedoras, se apostaron en las afueras de local de votación y quemaron material electoral
26	Loreto	Ucayali	Contamana	Sin datos	Debido a una balacera realizada fuera del local de votación, el personal pensó que era un ataque terrorista y dejó el material electoral. En el transcurso de lo sucedidos se extraviaron las actas.
27	Pasco	Oxapampa	Pallanchacra	Pobre	Simpatizantes del APRA y Perú Posible incursionaron en el local de votación ante la información sobre una posible derrota electoral. Agredieron al personal de la ODPE y se apoderaron del total del material electoral de 03 mesas de sufragio. Causaron daños a las instalaciones del local de votación
28	Puno	Moho	Huayrapata	Muy Pobre	Alrededor de 300 pobladores del distrito de Huayrapata tomaron local de votación y agredieron al personal ODPE, del JEE y resguardo policial apoderándose de material electoral (09 actas) las cuales fueron recuperadas posteriormente

29	Puno	Huancané	Huacané	Sin datos	Reynaldo Ortiz Ortiz, Julio Cama Feje y Nina Civincha pertenecientes al Frente Unido Progresista encabezaron un mitin frente a la sede de la ODPE, impidieron el ingreso de la jefa de esta institución y arrojaron objetos contundentes contra la sede.
30	Puno	Huancané	Huacané	Sin datos	Cuatro individuos encapuchados portando armas de fuego ingresaron al local de votación, agredieron al vigilante, preguntaron por el paradero de la Jefa y la dirección de la ODPE de Juliaca así como por el lugar donde estaba guardado el material electoral, Amenazaron de muerte al vigilante y profirieron amenazas de muerte contra la responsable de la ODPE
31	Puno	Huancané	Huacané	Sin datos	Pobladores se reunieron frente a la sede de la ODPE atacándola con objetos contundentes. Tres manifestantes se encadenaron a la puerta de la oficina. Esto debido a que los pobladores querían que las actas observadas sean consideradas en el conteo electoral.
32	Puno	Lampa	Palca	Muy pobre	Representantes del Partido Aprista, Wilder Cama; Primero Perú, Gilder Vilca; Somos Perú, Samuel Quispe; y del Frente Unido Progresista, Seferino Cayhua, ante el conocimiento de la supuesta presencia de electores migratorios irrumpieron en el local de votación rompiendo vidrios entre otros objetos. Asimismo, con una bomba incendiaria atentaron contra la vida de una de las coordinadoras de mesa quien fue socorrida por un efectivo de la PNP apagando el fuego con una frazada. El material electoral permaneció intacto

33	Puno	Chucuito	Huacullani	Pobre	Alrededor de 1500 individuos, encabezados por Héctor Chambilla Pérez de la organización "Orgullo Aymara" y el candidato de la UPP, David Quispe Machaca, tomó los dos locales de votación y se apoderó del material electoral y lo destruyó (24 mesas).
34	San Martín	Picota	Caspizapa	Pobre	El candidato de Perú Posible, Jairo Ríos Márquez; el Gobernador Eduardo Paredes Panduro y el director del CE Integrado 0769, Robert Paredes Pinedo, al ver que los resultados electorales no le eran favorables ingresaron a la fuerza al local de votación junto con, aproximadamente, 300 personas. Controlaron al personal de seguridad y agredieron a la representante del JEE quemando finalmente el material electoral de todas las mesas
35	San Martín	Huallaga	El Eslabón	Pobre	Un grupo de 150 personas encabezados por el alcalde que postulaba a la reelección, Ruber Ramírez Ruiz del Movimiento "Nueva Amazonía", así como por Robert Pérez Lozano de Perú Posible; Andrés Sandoval del APRA, y los civiles Elger Flores Marchena, Martha Jesús Lozano, Rogelio Saldaña Ruiz y Jenssi Flores, ingresaron al local de la ODEP. Agredieron al personal de ONPE, del JEE y de Transparencia y quemaron el material de cinco de las siete mesas del distrito. Resultaron golpeados y malheridos el Coordinador Distrital de la ONPE Brian Vásquez Rodríguez; la presidenta de Mesa 00546913, Norma Ruiz Ruiz, la observadora de Transparencia Lola Reátegui y la funcionaria del JEE Tatiana Cárdenas Vásquez.
36	San Martín	San Martín	Carlos Alberto Leveau	Pobre	En Utcuarees unos 400 pobladores encabezados por Rosa Mercedes Aching Rojas, candidata a regidora por Perú Posible; Cidlia Cordova Del Águila, personera del mismo partido y Hugner Tenazoa Rengifo del APRA, asaltaron el local de votación y quemaron el material de 12 mesas.

37	San Martín	El Dorado	San Martín	Muy Pobre	Luego de terminado el escrutinio una muchedumbre calculada en 500 individuos, encabezados por el candidato a la alcaldía del APRA, Pedro Antonio Villacorta Saboya y sus candidatos a regidores, Moisés Neyra Neyra, Amado Lara Goicochea, Juan Luis Saboya Saboya, Cecilia Vela Ríos De Rucoba, Belén Rodríguez Meza, con los personeros de mesa del mismo partido, Andrés Pintado Córdova, Róger Paredes López, Edwin Guerra Chujutally Y Miralmin Gatica García, ingresaron con violencia al local tomando como rehenes al personal de la ODPE. Se apoderaron del material electoral, para quemarlo en el patio.
38	Ucayali	Atalaya	Yurúa de Breu	Muy Pobre	Una turba encabezada por Gerson Mañariengo Odicio de Somos Perú; Italo Calucio Troyani Soto de Perú Posible; Limber Pfenino de Nueva Amazonía y Carlos Pérez de Acuerdo Popular, impidió desde el domingo día de las elecciones hasta el lunes por la mañana, el traslado del material electoral hacia la base policial Umar 5 –EP. Se franqueó la entrada al local de votación y se quemó el material electoral

Fuente. Las malas artes: violencia en elecciones locales. Volumen 6. Cuadernos de Trabajo. Centro de Investigación Electoral. Oficina Nacional de Procesos Electorales, Perú. Lima, 2003.